

**BARRICK EXPLORACIONES ARGENTINA S.A.
EXPLORACIONES MINERAS ARGENTINAS S.A.**

**PROYECTO PASCUA-LAMA
TEXTO ORDENADO
DEL INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL
EXP. ADM. N° 414-657-B-04
ETAPA DE EXPLOTACIÓN**

SECCIÓN 8.0 – NORMAS CONSULTADAS

**(Ref. No. SA202-00027/3-4, Rev. 0)
Julio, 2006**

**BARRICK EXPLORACIONES ARGENTINA S.A.
EXPLORACIONES MINERAS ARGENTINAS S.A.**

**PROYECTO PASCUA-LAMA
TEXTO ORDENADO DEL INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL
ETAPA DE EXPLOTACIÓN**

SECCIÓN 8.0 – NORMAS CONSULTADAS

CONTENIDO

SECCIÓN 8.0 – NORMAS CONSULTADAS	1
8.1 RÉGIMEN JURÍDICO INTERNACIONAL PROYECTO PASCUA-LAMA	2
8.2 RÉGIMEN JURÍDICO NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL PROYECTO PASCUA-LAMA	6
8.2.1 Bases Constitucionales	6
8.2.1.1 Constitución Nacional de la República Argentina	6
8.2.1.2 Constitución de la Provincia de San Juan de 1986	7
8.2.2 Legislación Ambiental de Carácter General	8
8.2.2.1 Ley Nacional N° 25.675, Política Ambiental Nacional – Presupuestos Mínimos para la Gestión Sustentable y Decreto Nacional N° 2.413/2000	8
8.2.2.2 Ley Provincial N° 6.634, General del Ambiente - Principios Rectores para la Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente Provincial	11
8.2.2.3 Ley Provincial N° 6.571, Evaluación del Impacto Ambiental, modificada por Ley Provincial N° 6.800	13
8.2.2.4 Ley Nacional N° 25.831, Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental	13
8.2.2.5 Ley Provincial N° 2.553, denominada Código Sanitario	14

8.2.2.6	Ley Nacional N° 18.284, Código Alimentario Argentino, y su Decreto Reglamentario N° 2.126/1971	15
8.2.3	Legislación de Carácter General Aplicable a la Minería	15
8.2.3.1	Ley 24.196, Ley de Inversiones Mineras, Decreto Reglamentario N° 2.686/1994 y modificatorias	15
8.2.3.2	Ley Nacional N° 24.228, Acuerdo Federal Minero y Ley Provincial de Adhesión N° 6.174	16
8.2.3.3	Código de Minería y Ley Nacional N° 24.585. Decreto Provincial N° 1.426/1996	18
8.2.4	Legislación Relacionada con la Conservación y Manejo de los recursos Hídricos	21
8.2.4.1	Ley Nacional N° 25.688, Régimen de Gestión Ambiental de Aguas	21
8.2.4.2	Ley Provincial N° 4.392, denominada Código de Aguas	22
8.2.4.3	Ley Provincial N° 5.824, sobre la Preservación de los Recursos de Agua, Suelo y Aire y Control de la Contaminación en la Provincia de San Juan, Decreto Provincial N° 638/1989 y su modificatorio Decreto Provincial N° 0841/2003	25
8.2.5	Legislación Relacionada a la Protección de los Recursos Patrimoniales	26
8.2.5.1	Ley Nacional N° 25.743 Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico y Decreto Reglamentario N° 1.022/2004	26
8.2.5.2	Ley Provincial N° 6.801, Ley Marco sobre el Patrimonio Histórico Cultural y Decreto Provincial Reglamentario N° 1.134/2001	28
8.2.6	Legislación Relacionada a la Protección de la Flora y Fauna	30
8.2.6.1	Ley Nacional N° 22.421, de Protección y Conservación de la Fauna Silvestre y su Decreto Reglamentario N° 666/1997. Ley Provincial N° 6.911, sobre la Flora y Fauna Silvestre	30
8.2.6.2	Ley Nacional N° 22.351, sobre Parques y Reservas Nacionales y Monumentos Naturales	31

8.2.6.3	Ley Provincial N° 6.911, sobre la Flora y Fauna Silvestre	32
8.2.6.4	Reserva Provincial San Guillermo	36
8.2.7	Legislación Ambiental Relacionada a la Infraestructura Requerida	41
8.2.7.1	Ley Nacional N° 13.660, Dicta Normas a que Deberán Ajustarse las Instalaciones de Elaboración, Transformación y Almacenamiento de Combustibles, Decreto Reglamentario N° 10.887 y Decreto Nacional N° 1.212/1989	41
8.2.7.2	Resolución N° 1102/04 de la Secretaría de Energía	42
8.2.7.3	Resolución N° 404/1994 de la Secretaría de Energía	43
8.2.7.4	Ley Nacional N° 20.429, Ley Nacional de Armas y Explosivos – Sustitución de la Ley N° 13.945. Decreto Reglamentario Parcial N° 302/1983, sobre Reglamentación Parcial de Pólvoras, Explosivos y Afines	43
8.2.7.5	Ley Nacional N° 24.449, Ley de Tránsito, y Decreto Nacional Reglamentario N° 779/1995, Resolución Nacional N° 195/1997. Ley Provincial de Adhesión N° 6.684, Decreto Provincial Reglamentario N° 326/1997 y demás normas reglamentarias	44
8.2.7.6	Decreto N° 1.544-MOSP y MA/2002, sobre Seguridad y Control de Presas	46
8.2.7.7	Ley Nacional N° 19.587, de Higiene y Seguridad en el Trabajo y el Reglamento Complementario, Decreto N° 351/1979 y sus modificatorias	47
8.2.8	Legislación Ambiental Relacionada al Manejo de Residuos	49
8.2.8.1	Ley Nacional N° 25.612, sobre Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de Servicios y Decreto Nacional N° 1.343/2002, de Promulgación Parcial de la Ley	49

8.2.8.2	Ley Nacional N° 25.919, sobre Gestión de Residuos Domiciliarios y Decreto Nacional N° 1.158/2004, de Promulgación Parcial de la Ley	51
8.2.8.3	Ley Nacional N° 23.992, Ratificación del Convenio de Basilea	53
8.2.8.4	Ley Nacional N° 25.670, Presupuestos Mínimos Para La Gestión y Eliminación de los P.C.B.	53
8.2.8.5	Ley Nacional N° 24.051, sobre Residuos Peligrosos y Decreto Reglamentario Nacional N° 831/1993. Ley Provincial de Adhesión N° 6.665	54
8.2.8.6	Ley Provincial N° 7.375, modificada por Ley Provincial N° 7.396, sobre Residuos Sólidos y Urbanos, Vertederos Controlados	56
8.2.8.7	Ordenanza Municipal N° 833, Aprobada por Acta N° 915 del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Iglesia	58
8.2.9	Legislación Relacionada al Manejo de Contingencias	59
8.2.9.1	Ley Provincial N° 6.837, y modificatoria Ley Provincial N° 6904. Decreto Reglamentario N° 1476-MG-2000, sobre Régimen de Defensa Civil en coincidencia con lo establecido en la Ley Nacional N° 24.059 y normas reglamentarias de Seguridad Interior	59
8.2.9.2	Ley Provincial N° 7.055. Aprobación del Convenio Marco de Asistencia y Cooperación Recíproca entre El Gobierno de la Provincia de San Juan y Gendarmería Nacional - Agrupación X San Juan	61
8.3	CRITERIOS O ESTÁNDARES TÉCNICOS APLICABLES AL PROYECTO	62
8.3.1	Calidad del Aire y Emisiones	62
8.3.2	Recursos Hídricos	63
8.3.3	Calidad del Suelo	63
8.3.4	Hábitat, Flora y Fauna	63
8.3.5	Recursos Patrimoniales	64

8.3.6	Ruido	64
8.3.7	Manejo de Sustancias Peligrosas	64
8.3.8	Residuos Sólidos	65

TABLAS

TABLA TO8.1	Estándares y Guías de Calidad del Aire Ambiental, $\mu\text{g}/\text{m}^3\text{N}$
TABLA TO8.2	Estándares de Emisiones Gaseosas
TABLA TO8.3	Niveles Guía de Calidad de Aire Ambiental
TABLA TO8.4	Niveles Guía de Calidad de Agua Según su Uso, conforme Decreto N° 1.426/1996
TABLA TO8.5	Normas de Efluentes Domésticos, Industriales y Mineros, con Descarga a Cuerpos Receptores de la Provincia de San Juan
TABLA TO8.6	Niveles Guía de Calidad de Suelos Según su Uso
TABLA TO8.7	Criterio de Referencia para el Ruido por Tránsito de Vehículos

**BARRICK EXPLORACIONES ARGENTINA S.A.
EXPLORACIONES MINERAS ARGENTINAS S.A.****PROYECTO PASCUA-LAMA
TEXTO ORDENADO DEL INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL
ETAPA DE EXPLOTACIÓN****SECCIÓN 8.0 – NORMAS CONSULTADAS**

Conforme a lo dispuesto en las Normas Complementarias para la Implementación de la Ley N°24.585 de Protección Ambiental para la Actividad Minera, Presupuestos Mínimos, aprobadas por Decreto Provincial N° 1.426-MPI y MA-1996, en su Anexo III, punto VIII, a continuación se identifica y describe la normativa y/o criterios provinciales, nacionales e internacionales observados y consultados para la preparación del Informe de Impacto Ambiental.

Por su particular situación geográfica el Proyecto Pascua-Lama, ubicado en el límite entre la República Argentina y la República de Chile, está sujeto a disposiciones de carácter binacional, las cuales no sólo deslindan el derecho aplicable a diversas situaciones según el lugar geográfico donde se presenten sino que también contienen regulaciones de fondo aplicables a determinadas situaciones jurídicas que pueden presentarse en la denominada “Área de Operaciones” (espacio determinado por los protocolos binacionales específicos para el Proyecto Pascua-Lama en donde se aplican sus disposiciones).

Este documento en su primera sección contiene una explicación del Régimen Jurídico Internacional aplicable al Proyecto Pascua-Lama, junto con una síntesis de su origen jurídico. La segunda sección contiene, ordena o aborda las normas consultadas en relación con la legislación nacional, provincial y municipal aplicable al proyecto. La tercera, contiene los estándares, criterios o recomendaciones nacionales, provinciales o internacionales consultados y revisados en relación a la faena minera en evaluación.

Lo anterior ha permitido abordar los diversos aspectos relacionados con el impacto que la actividad genera en el entorno, tales como aire, agua, suelo, flora y fauna, hábitat e infraestructura.

Las normas incluidas a continuación corresponden a aquellas que, de conformidad con la Ley de Protección Ambiental para la Actividad Minera y su Reglamento, han sido consultadas o tenidas a la vista al momento de elaborar el presente Informe de Impacto Ambiental, sin que ello signifique necesariamente que tales normas resultan aplicables al Proyecto Pascua-Lama. Cuando esto último ocurre, sus contenidos han sido incorporados en los distintos capítulos del Informe; por el contrario, cuando luego de analizadas las normas se ha llegado a la conclusión de que algunas de ellas no son aplicables al Proyecto, simplemente se han desestimado.

8.1 RÉGIMEN JURÍDICO INTERNACIONAL PROYECTO PASCUA-LAMA

El Tratado de Montevideo de 1980 creó la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), cuyo objetivo es la integración regional como un factor fundamental para que los países de América Latina avancen en su desarrollo económico y social y puedan tener una participación competitiva en la economía internacional. Para estos fines se contemplan tres mecanismos:

- Preferencia arancelaria regional aplicada a productos originarios de los Países Miembros¹ frente a los aranceles vigentes para terceros países.
- Acuerdos de alcance regional.
- Acuerdos de alcance parcial, con la participación de dos o más países del área.

Dentro de este marco internacional se celebra en 1991 el Acuerdo de Complementación Económica entre Chile y Argentina (ACE N° 16), el que considera necesario profundizar la integración binacional creando sólidos intereses recíprocos para optimizar el uso de los recursos y estructuras productivas y mejorar así las condiciones de su inserción competitiva en la economía internacional. Para los fines anteriores, contempla dentro de sus objetivos el *facilitar el desarrollo de proyectos de interés común en el ámbito de la industria, la infraestructura, la energía, la minería, el turismo y en otros sectores, especialmente con la activa participación del sector privado*², promoviendo en forma gradual y equilibrada la complementación económica e integración física. A su vez, establece que los países signatarios suscribirán acuerdos, protocolos y otras decisiones complementarias para facilitar, entre otras materias, *la complementación y coordinación para el desarrollo del sector*

¹ Entre sus doce países miembros se encuentra Argentina, la que ratificó el tratado por ley 22.354, publicada en el Boletín Oficial el 23 de Diciembre de 1980 y Chile, la que ratificó el tratado con fecha 25 de Junio de 1981 y se publicó como ley de la república por D.S. 568 de fecha 24 de Agosto de 1981.

² Artículo 1° letra d).

*minero*³. Por último, los países signatarios destacan la conveniencia de promover y facilitar el desarrollo de proyectos mineros a ambos lados de la frontera por personas físicas o jurídicas de los dos países, así como también la participación de inversiones extranjeras en los mismos⁴.

Forma parte del ACE N° 16 el Protocolo N° 3 sobre “Cooperación e Integración Minera”, en el que ambos países convienen en alentar la concreción de proyectos específicos para la puesta en marcha de empresas de producción y comercialización⁵; se coincide en la conveniencia de asegurar el aprovechamiento conjunto de los recursos que se extienden a ambos lados de la frontera, de tal modo que su exploración y explotación se lleve a cabo en forma racional e integrada⁶.

En paralelo, la República de Argentina y Chile advierten la conveniencia y necesidad de armonizar la utilización de los recursos naturales que comparten con la protección del medio ambiente y emprender acciones coordinadas o conjuntas en materia de protección, preservación, conservación y saneamiento del medio ambiente. Para ello acuerdan impulsar la utilización racional y equilibrada de los recursos naturales, considerando el vínculo existente entre medio ambiente y desarrollo. En tal sentido, el 2 de Agosto de 1991, Chile y Argentina suscriben el Tratado sobre Medio Ambiente.

Dicho tratado busca crear las bases para desarrollar acciones conjuntas mediante el intercambio de información y bases de datos, evaluaciones de impacto ambiental, referidas entre otras materias, al desarrollo de métodos de evaluación y adopción de medidas correctivas en actividades mineras, industriales y otras que pudieren afectar negativamente el medio ambiente, incluyendo la eliminación y reciclaje de residuos.

Forma parte del tratado anterior el Protocolo Específico Adicional sobre Recursos Hídricos Compartidos entre la República de Argentina y Chile, cuyo objetivo consiste en el aprovechamiento de recursos hídricos en el territorio de una de las partes, pertenecientes a una cuenca común, no cause perjuicios a los recursos hídricos compartidos, a la cuenca común o al medio ambiente.

³ Artículo 16° letra h)

⁴ Artículo 18°

⁵ Artículo 1°

⁶ Artículo 3°

Un segundo acuerdo firmado por los países de Argentina y Chile, es el Protocolo Específico Adicional al Tratado con Argentina sobre Medio Ambiente, sobre Conservación de la Flora y Fauna Silvestre Compartida entre Argentina y Chile. El objeto del presente acuerdo radica en la adopción de medidas comunes y coordinadas tendientes a la efectiva protección, conservación y uso sustentable de las especies comunes compartidas y sus hábitats y favorecer la conservación y la restauración de los ecosistemas donde habita dicha flora y fauna.

Dentro del marco normativo indicado, en 1997 se acuerda el Vigésimo Protocolo Adicional al ACE N° 16, para Facilitar la Ejecución del Proyecto Minero denominado “Pascua-Lama”, en el que se establecía que el Proyecto y las actividades asociadas a éste en el territorio de cada una de las Partes se llevarían a cabo con sujeción a sus respectivas legislaciones.

En cuanto a la evaluación de impacto ambiental del Proyecto, el Artículo Décimo indicaba que las Partes facilitarían dicha evaluación a través de los procedimientos administrativos contemplados en sus respectivas legislaciones, y promoverían el intercambio de información relevante, que tuviera relación con los principales efectos ambientales del mismo.

En 1998 las Partes acuerdan el Vigésimotercer Protocolo Adicional al ACE N° 16, relativo al Proyecto Minero “Pascua-Lama”, que tenía por objeto reglamentar el Vigésimo Protocolo, fijando los procedimientos aplicables al control de las actividades del Proyecto.

Los Protocolos indicados⁷ establecían, asimismo, los procedimientos relativos a aspectos aduaneros, migratorios, sanitarios, de salud y de seguridad que debían aplicar los organismos públicos de las partes con competencia en dichas materias y que debían cumplir las empresas que desarrollen el Proyecto.

Ahora bien, como forma de profundizar la integración de ambos países y reconociendo que la integración minera entre Argentina y Chile es un propósito de utilidad pública e interés general de la nación, Argentina y Chile firman el Tratado Sobre Integración y Complementación Minera en Diciembre de 1997, el cual fuera aprobado por la Argentina el 24 de Marzo de 2000⁸ y por Chile el 7 de Febrero del 2001⁹. Su objetivo es procurar el

⁷ Los Protocolos Vigésimo y Vigésimotercero fueron sustituidos por el Protocolo Adicional Especifico al Tratado sobre Integración y Complementacion Minera firmado entre la República Argentina y la República de Chile para el Proyecto Minero “Pascua-Lama”.

⁸ Ley N° 25.243

aprovechamiento conjunto de los recursos mineros que se encuentren en la zona fronteriza de ambas naciones, propiciando la constitución de empresas entre nacionales y sociedades de ambos países y la facilitación del tránsito de los equipos, servicios mineros y personal adecuado a través de la frontera común.

Para efectos de implementar el Tratado sobre Integración y Complementación Minera, se prevé:

- El acceso, desempeño y protección de todas las actividades y servicios que tengan relación con el negocio minero, mediante el ejercicio de los derechos establecidos en la legislación de cada una de las partes, entre los cuales se incluyen las servidumbres y otros derechos contemplados en favor de las concesiones mineras y las plantas de beneficio, fundición y refinación, todos los cuales se extenderán a las concesiones y plantas del territorio de la otra parte en que se aplique el Tratado.
- El desarrollo del negocio minero.
- El desarrollo de las actividades accesorias al negocio minero.

El Tratado Minero resulta un marco normativo de mayor precisión y compromiso de los países firmantes respecto al desarrollo de los proyectos mineros que se encuentren ubicados en la zona determinada por el Anexo I al Tratado (coordenadas dentro de las cuales se encuentra el Proyecto Pascua-Lama).

El Artículo 12° del Tratado Minero indica que las Partes aplicarán sus respectivas legislaciones nacionales sobre protección del medio ambiente, sometiendo las actividades mineras al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en Chile y a la Declaración de Impacto Ambiental en la Argentina, según corresponda. Asimismo, las Partes promoverán el intercambio de información relevante que tenga relación con los principales efectos ambientales de cada uno de los negocios mineros o actividades accesorias, comprendidas en el Tratado.

Asimismo, el Artículo 5° del Tratado Minero dispone que los inversionistas que requieran de las facilidades fronterizas, actividades transfronterizas, la constitución de servidumbres o el ejercicio de los derechos contemplados para el desarrollo de negocios mineros, deberán solicitarlos a la Comisión Administradora establecida en el Artículo 18° del Tratado Minero.

⁹ D.S. 2.275 del Ministerio de Relaciones Exteriores

Según lo prevé el Artículo 5° del Tratado, la Comisión Administradora, previa evaluación, puede recomendar a las Partes la adopción de Protocolos Adicionales Específicos, en los que se determinará el Área de Operaciones y los procedimientos que en cada caso correspondieren.

En lo que al Proyecto Pascua Lama se refiere, el texto fue firmado por las autoridades correspondientes de Argentina y Chile en Santiago el 13 de Agosto del 2004.

El Protocolo Adicional Específico - cuyo Artículo 46° reproduce casi textualmente, en relación con la legislación aplicable a Medio Ambiente, lo dispuesto por el Artículo 12° del Tratado Minero - ha entrado en vigor en la fecha de su firma, (conforme el Artículo 5° del Tratado Minero - Protocolos Adicionales Específicos y Artículo 49° del Protocolo Adicional Específico para Pascua-Lama) y fue publicado en el Boletín Oficial de la Republica Argentina el 23 de Septiembre de 2004.

Además el Protocolo Adicional Especifico establece normas referidas a diversos aspectos a saber: aduaneros, tributarios, migratorios, vinculados a la seguridad, fito y zoonosanitarios, de salud, laborales y previsionales; así también constituyen su plexo normativo disposiciones que regulan el área de operaciones, la ubicación y caracterización de los puestos de control en sectores argentino y chileno, facilidades aéreas, telecomunicaciones, recursos hídricos, servidumbres y el Anexo I referido a los derechos y concesiones mineras.

8.2 RÉGIMEN JURÍDICO NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL PROYECTO PASCUA-LAMA

8.2.1 Bases Constitucionales

8.2.1.1 Constitución Nacional de la República Argentina

La Constitución Nacional Argentina otorga a todos los habitantes el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras, a raíz de lo cual tienen el deber de preservar el medio ambiente.

Por su parte, corresponde al Estado y a sus autoridades promover las condiciones necesarias para la protección de este derecho. En particular, nos interesa destacar que corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales, (Artículo 41° Constitución Nacional). Nuestra norma

fundamental establece el principio de que el daño ambiental generará la prioritaria obligación de recomponer.

Finalmente, cabe destacar dos elementos específicos de protección que define la Constitución Argentina, en primer término prohíbe el ingreso de residuos actual o potencialmente peligrosos al territorio argentino y, en segundo término, legisla una acción de amparo cuya finalidad es poner fin a cualquier acto u omisión de autoridades o particulares que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta los derechos y garantías que reconoce la Constitución, entre éstos el derecho a un ambiente sano y equilibrado.

8.2.1.2 Constitución de la Provincia de San Juan de 1986

Conforme al Artículo 58° de la Constitución Provincial, y en forma concordante con la Constitución Nacional, los habitantes de la provincia tienen derecho a una vida salubre y ecológicamente equilibrada. Para la protección de este derecho, otorga a toda persona la acción de amparo para la cesación de las causas que generan la perturbación del derecho. Como contrapartida, toda persona tiene la obligación de conservar el entorno.

Por su parte es obligación del Estado prevenir y controlar la contaminación y sus efectos. Así mismo, está obligado a promover la mejora progresiva y acelerada de la calidad de vida de todos sus habitantes.

El texto del Artículo 58° de la Constitución de la Provincia de San Juan se complementa con otras normas, que si bien no se refieren autónomamente al medio ambiente, están destinadas a garantizar otros derechos que no le son ajenos, pudiendo mencionar: el Artículo 61° derecho a la salud; el Artículo 113° dominio de los recursos naturales; el Artículo 114° función de la tierra; el Artículo 116° promoción de la forestación; el Artículo 117° régimen de aguas y los Artículos 118°, 119° y 120° sobre administración de los recursos hídricos.

8.2.2 Legislación Ambiental de Carácter General

8.2.2.1 Ley Nacional N° 25.675, Política Ambiental Nacional – Presupuestos Mínimos para la Gestión Sustentable y Decreto Nacional N° 2.413/2000

Ley Nacional N° 25.675: Boletín Oficial 28 de Noviembre del 2002.

Decreto Nacional N° 2.413/2000: Boletín Oficial 27 de Noviembre del 2002.

Esta ley establece los presupuestos mínimos en base a los cuales se ordenará la gestión ambiental del Estado Argentino y la aplicación e interpretación de las normas ambientales vigentes en cuanto éstas no fueren contrarias a las disposiciones contenidas en la ley.

En consecuencia, la relevancia de esta norma ésta dada más que la aplicación directa al proyecto minero Pascua-Lama, porque sus contenidos mínimos servirán para la aplicación e interpretación del ordenamiento jurídico ambiental. Es justamente en este sentido que se ha considerado la presente norma en este capítulo, la cual fuera legislada en virtud del mandato constitucional del Artículo 41° de la Constitución Nacional.

Considerando el carácter general de esta ley, el legislador ha establecido como bien jurídico protegido las bases mínimas necesarias para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable, en todo el territorio de la República. A esta ley, de carácter general, debe adecuarse la legislación en materia ambiental, a nivel nacional, provincial y municipal.

La misma dispone que los objetivos de la política ambiental son:

- a) Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las diferentes actividades antrópicas;
- b) Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, en forma prioritaria;
- c) Fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión;
- d) Promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales;
- e) Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos;
- f) Asegurar la conservación de la diversidad biológica;

- g) Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre el ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo;
- h) Promover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo sustentable, a través de una educación ambiental, tanto en el sistema formal como en el no formal;
- i) Organizar e integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso de la población a la misma;
- j) Establecer un sistema federal de coordinación interjurisdiccional, para la implementación de políticas ambientales de escala nacional y regional;
- k) Establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para la recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental.

En concordancia con los objetivos de la política ambiental, la interpretación y aplicación de la ley se sujetará a los siguientes principios formativos:

- Principio de congruencia
- Principio de prevención
- Principio precautorio
- Principio de equidad intergeneracional
- Principio de progresividad
- Principio de responsabilidad
- Principio de subsidiariedad
- Principio de sustentabilidad
- Principio de solidaridad
- Principio de cooperación

Para operativizar la aplicación de la Ley, el legislador establece como instrumentos de política y gestión ambiental los siguientes:

- El ordenamiento ambiental del territorio
- La evaluación de impacto ambiental
- El sistema de control sobre actividades antrópicas
- La educación ambiental
- Sistema de información ambiental
- Participación ciudadana

- Cauciones ambientales

Cabe señalar que a los efectos de la aplicación efectiva de los instrumentos de política y gestión ambiental ya indicados, es necesario que en algunos casos como por ejemplo en las cauciones o seguros ambientales, participación ciudadana y fondos de compensación ambiental, se provean las reglamentaciones necesarias a fin de precisar la forma, oportunidad y medios que harán posible la ejecución de estas normas.

La ley también regula el daño ambiental de incidencia colectiva, a cuyo fin lo define como “toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos”. Consagra la responsabilidad objetiva en materia de daños ambientales, trasladando los principios de responsabilidad civil objetiva establecidos en el Artículo 1.113° del Código Civil y agravando los requisitos necesarios para la exención de responsabilidad.

Cabe destacar que en materia ambiental y conforme al tercer párrafo del Artículo 41° de la Constitución Nacional se ha producido por parte de las provincias una delegación a favor de la Nación en lo que hace a la determinación de “presupuestos mínimos” para la protección ambiental, los que deberán ser complementados con legislación provincial. En este sentido se han desdibujado las líneas divisorias entre las potestades nacionales y provinciales, por ello a los efectos de lograr el consenso necesario en materia ambiental se instituye el Sistema Federal Ambiental, el cual es instrumentado por el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) con el objeto de desarrollar la coordinación de la política ambiental, tendiente al logro del desarrollo sustentable en todo el territorio de la República.

En la Provincia de San Juan se sancionó con anterioridad a la Ley Nacional N° 25.675, la Ley Provincial N° 6.634 denominada también Ley General del Ambiente, tratada en este capítulo.

8.2.2.2 Ley Provincial N° 6.634, General del Ambiente - Principios Rectores para la Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente Provincial

Publicación en el Boletín Oficial: 28 de Noviembre de 1995.

La citada ley establece los principios rectores del derecho ambiental provincial y para ello declara de “Interés Provincial” las acciones y actividades destinadas a la preservación, conservación, defensa y mejoramiento de los diferentes ecosistemas urbanos, agropecuarios y naturales y sus elementos constitutivos, los que por su función y características, mantienen o contribuyen a mantener la organización ecológica más conveniente para el desarrollo cultural, científico y tecnológico y el bienestar común en armónica relación con el ambiente. Es decir, el Interés Provincial busca conciliar la conservación y preservación ambiental con el desarrollo cultural, científico y tecnológico y el bienestar común.

Para los efectos anteriores, la Ley Provincial N° 6.634 dispone que la preservación, defensa y mejoramiento del ambiente comprende, en lo que interesa al desarrollo de actividades productivas, lo siguiente:

- La planificación y ordenamiento territorial urbano y rural. La definición del ordenamiento territorial corresponde a la autoridad competente y a la cual debe ajustarse todo proyecto de desarrollo industrial.
- La utilización ordenada y racional del conjunto de los recursos naturales.
- Las actividades tendientes al logro de una mejor calidad de vida de los ciudadanos en sus diferentes aspectos. Esto es, que el desarrollo de la actividad industrial sea compatible con el desarrollo y mejoramiento de la vida social y comunitaria.
- La corrección, prohibición, anulación o represión de las actividades que degraden el ambiente humano, natural y cultural o que afecten el equilibrio ecológico, más allá de los límites establecidos en la normativa correspondiente. Lo anterior apunta al concepto de uso racional, ya mencionado, y al desarrollo sustentable, conceptos que reconociendo la necesidad de desarrollo económico y bienestar material de la población busca la conciliación de éste con el medio ambiente. La medida de lo racional y de la compatibilidad de la actividad económica o industrial está dada por los límites definidos por la legislación vigente aplicable a la actividad minera, para las

descargas al medio a través de las emisiones atmosféricas, hídricas y de residuos industriales sólidos, así como del cumplimiento de las obligaciones ambientales legales.

Para implementar los principios anteriormente enunciados, la Ley General del Ambiente dispone que el poder ejecutivo provincial y los municipios garanticen, en la ejecución de sus actos de gobierno, una política económica y social que observe los siguientes postulados de Política Ambiental, entre los que interesa destacar:

- Promover y orientar el desarrollo económico con criterios ambientales.
- Promover y orientar el desarrollo económico con criterios sustentables, no limitándose a establecer restricciones y controles.
- Los actos de gobierno estarán inspirados siempre en la adopción de medidas preventivas, antes que en la implementación de medidas de saneamiento o reparación, optándose por éstas últimas cuando no son viables las primeras.
- Propiciar el mejoramiento gradual de la calidad ambiental mediante la disminución de los niveles de contaminación. Para este efecto se establecerán estándares ambientales y límites máximos permisibles de emisiones contaminantes sean éstas sólidas, líquidas o gaseosas.

Los conceptos vertidos anteriormente establecen el objetivo de la legislación ambiental y la finalidad perseguida con ésta, como herramienta e instrumento de gestión ambiental de aplicación general por parte de la autoridad.

La ley también crea el Fondo Provincial del Ambiente con el objetivo principal de captar recursos dirigidos al financiamiento de las actividades determinadas para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley.

En virtud de dicha ley, los organismos de aplicación corresponden al Poder Ejecutivo Provincial y los Municipios.

De lo expuesto y relacionando la norma provincial analizada con la Ley General del Ambiente, se puede concluir que no existe en esta norma provincial disposiciones contrarias a la ley nacional, por lo cual la citada norma cumple con el principio de congruencia vigente en esta materia.

8.2.2.3 Ley Provincial N° 6.571, Evaluación del Impacto Ambiental, modificada por Ley Provincial N° 6.800

Ley Provincial N° 6.571: Boletín Oficial 3 de Enero 1995.

Ley Provincial N° 6.800: Boletín Oficial 16 de Julio 1997.

La Ley N° 6.571 se aplica a todos los proyectos de obras o actividades capaces de modificar directa o indirectamente el ambiente del territorio provincial, quienes deberán obtener su correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (DIA), expedida por la Subsecretaría de Política Ambiental quien resulta ser la Autoridad de Aplicación de esta norma.

Esta ley fue modificada por la Ley Provincial N° 6.800, la cual introduce importantes modificaciones, todas referidas a la actividad minera.

Por esta modificación normativa se exceptúa expresamente a la actividad minera del ámbito de aplicación de la Ley N° 6.571.

En cuanto al procedimiento de evaluación ambiental de los proyectos mineros se indica que los mismos deberán cumplir las disposiciones contenidas en el Código de Minería, su título complementario de la protección ambiental para la actividad minera y sus normas reglamentarias.

En forma específica y para los proyectos mineros se dispone que sea el Departamento de Minería con intervención de la Subsecretaría de Política Ambiental la Autoridad de Aplicación y encargada de expedir la correspondiente Declaración de Impacto, (DIA).

8.2.2.4 Ley Nacional N° 25.831, Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental

Publicación en el Boletín Oficial: 7 de Enero del 2004.

Esta norma, es una ley de presupuestos mínimos, por lo que establece las bases mínimas de protección que son de aplicación en todo el territorio de la Nación, incluyendo las Provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

Es importante considerar que su texto amplía lo estipulado por la Ley General del Ambiente (Artículo 2º inc. i y el Capítulo denominado Información Ambiental), y garantiza el derecho de acceso a la información ambiental que se encontrare en poder del Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, como así también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas (Artículo 1º).

La ley pretende facilitar el ejercicio del derecho al establecer el acceso a dicha información ambiental en forma libre y gratuita para toda persona física o jurídica sin necesidad de acreditar razones ni interés determinado.

La presente ley ha definido expresamente la información ambiental como *“toda aquella información en cualquier forma de expresión o aporte relacionada con el ambiente, los recursos naturales o culturales y el desarrollo sustentable”*. Sin embargo enumera taxativamente los casos en los cuales la información ambiental solicitada puede ser denegada mediante decisión o acto fundado.

Cabe consignar que la propia ley establece el plazo de noventa días para que se reglamente este régimen legal, como así también para que las autoridades nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires concreten dentro del ámbito del Consejo Federal del Ambiente (COFEMA) los criterios para establecer los procedimientos de acceso a la información ambiental en cada jurisdicción, situación que no se ha producido hasta el momento. Es por ello que se considera que la misma no es operativa hasta que no se cumpla con estos requerimientos.

8.2.2.5 Ley Provincial N° 2.553, denominada Código Sanitario

Publicación en el Boletín Oficial: 2 Julio 1959.

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 2º de este texto legal, es obligación de la Provincia velar por la salubridad en todo su territorio, en concordancia con las obligaciones que competen a la Nación y a los Municipios, a objeto de asegurar a sus habitantes un nivel adecuado para el mantenimiento de la salud.

Esta obligación se cumple mediante acciones de protección, promoción y reparación de salud. Estas comprenden preferentemente las relativas al saneamiento del medio

ambiente, a la promoción y control del agua de bebida y a la eliminación de excretas; al control de los insectos roedores, basuras y animales; al control de alimentos, al saneamiento de viviendas, industrias y locales, entre otras.

La autoridad de aplicación es la Secretaría de Salud Pública, conforme a lo que se desprende del Artículo 6° de esta ley y, particularmente, a lo establecido en el Artículo 185° de la misma. Adicionalmente, la policía prestará colaboración a Salud Pública en las labores que ésta realice.

8.2.2.6 Ley Nacional N° 18.284, Código Alimentario Argentino, y su Decreto Reglamentario N° 2.126/1971

Ley Nacional N° 18.284: Boletín Oficial 28 Julio de 1969.

Decreto Reglamentario N° 2.126: Boletín Oficial 20 de Septiembre de 1971.

Conforme su denominación, esta ley establece las condiciones y requisitos que deberán reunir las fábricas de alimentos y los lugares de expendio de éstos. Esta reglamentación es extensiva también a los casinos donde se preparen alimentos para su consumo en el mismo lugar.

La autoridad de aplicación será la autoridad sanitaria competente en el lugar donde se produzcan los alimentos.

8.2.3 Legislación de Carácter General Aplicable a la Minería

8.2.3.1 Ley 24.196, Ley de Inversiones Mineras, Decreto Reglamentario N° 2.686/1994 y modificatorias

Ley Nacional N° 24.196/1993: Boletín Oficial 24 de Mayo de 1993.

Decreto Nacional N° 2.686/1994: Boletín Oficial 3 Enero 1994.

Estos textos legales tienen por finalidad principal fomentar los emprendimientos mineros mediante el otorgamiento de beneficios tales como: la estabilidad fiscal por el término de 30 años a contar de la presentación a las autoridades del estudio de factibilidad y la exención de aranceles aduaneros, de derecho y de todo impuesto especial, gravamen o tasa estadística, por la importación de bienes de capital, equipos especiales, partes o elementos componentes de dichos bienes e insumos determinados por la Secretaría de Minería, necesarios para la actividad minera.

Desde el punto de vista ambiental, ello es relevante por cuanto las empresas que opten por este beneficio deben constituir una previsión especial para prevenir y subsanar las alteraciones que en el medio ambiente pueda ocasionar la actividad e informar anualmente a la autoridad de aplicación, a través de una declaración jurada, el importe de la previsión especial efectuada y el efectivamente erogado, no constituyendo esta previsión para los efectos de la ley un seguro ambiental, pero sí una especial previsión para subsanar las alteraciones en el medio ambiente. Cabe destacar que los montos no utilizados por la previsión deberán ser restituidos al balance impositivo del impuesto a las ganancias al finalizar el ciclo productivo.

Los proyectos que caen en el ámbito de esta ley deberán entregar a la autoridad un estudio técnico relacionado con el impacto ambiental ocasionado por la actividad y deberán mantener un cuidado especial en prevenir y remediar cualquier alteración al medio ambiente ocasionada a raíz de una actividad minera.

En virtud de la Ley Nacional 24.196, se determina como autoridad de aplicación a la Secretaría de Minería de la Nación. El Poder Ejecutivo Nacional concertará con las autoridades provinciales el ejercicio de las facultades constitucionales concurrentes.

8.2.3.2 Ley Nacional N° 24.228, Acuerdo Federal Minero y Ley Provincial de Adhesión N° 6.174

Ley Nacional N° 24.228: Boletín Oficial 02 de Agosto de 1993.

Ley por la que se Ratifica el Acuerdo Federal Minero, suscripto el 6 de Mayo del 1993 entre el Poder Ejecutivo Nacional y los Gobernadores de las Provincias.

Este acuerdo, firmado entre las provincias mineras de Argentina, tiene por finalidad los siguientes objetivos ambientales:

- Propiciar el aprovechamiento racional e integral de los recursos mineros en el territorio Nacional.
- Promover el desarrollo sectorial, consensuando medidas necesarias para atraer inversiones nacionales y extranjeras.

- Afianzar el Federalismo en cuanto al papel que desarrollan los Gobiernos Provinciales como administradores del patrimonio minero de sus respectivos Estados.
- Realizar en forma conjunta acciones destinadas a promover las oportunidades de inversión en la Minería Argentina.
- Profundizar el proceso de descentralización como modelo para la prestación de las funciones básicas del Estado.
- Proteger el medio ambiente a través de una racional actividad productiva.
- Aplicar con criterios actualizados la legislación vigente y armonizar normas de procedimientos, teniendo en cuenta las características propias de cada región.
- Optimizar el aprovechamiento de los recursos humanos, económicos y de infraestructura de las instituciones mineras nacionales y provinciales.

En definitiva, este acuerdo entre las provincias tiene por finalidad fomentar las inversiones mineras, tanto las de carácter nacional como internacional, fomentar el federalismo y la unificación de criterios en la materia y acentuar los procesos de descentralización.

En lo particular, respecto a la protección del medio ambiente, el Artículo 14° establece que las Provincias promoverán:

- La necesidad de cumplir, tanto para la actividad pública como privada, con una declaración de impacto ambiental para las tareas de prospección, exploración, explotación, industrialización, almacenamiento, transporte y comercialización de minerales.
- Implementar nuevas formas de fomento, como las especificadas en el Artículo 22° de la Ley Inversiones Mineras –refiérase a las regalías-, a los emprendimientos que favorezcan al medio ambiente, tales como la forestación de áreas mineras.
- Destinar fondos para la investigación en desarrollo tecnológico y social en proyectos vinculados a la conservación del medio ambiente en la actividad minera.
- Finalmente, consagra una disposición de carácter orgánico en cuanto establece que el Consejo Federal Minero será un órgano consultivo en materia de desarrollo regional, medio ambiente y aspectos tributarios provinciales relacionados con el presente Convenio.

El Acuerdo Federal Minero, en virtud de la Ley Provincial 6.174 de adhesión al Acuerdo del Consejo Federal Minero, aprobada el 05 de Septiembre de 1991, se constituyó en ley de la provincia.

8.2.3.3 Código de Minería y Ley Nacional N° 24.585. Decreto Provincial N° 1.426/1996

Ley Nacional N° 24.585: Boletín Oficial 24 de Noviembre de 1995.

Decreto Provincial N° 1.426/1996: Boletín Oficial 25 de Noviembre de 1996.

Las normas ambientales del Código de Minería fueron introducidas a éste por la Ley N° 24.585.

Conforme al Artículo 251° del Código de Minería, el titular minero está obligado a evaluar el impacto ambiental generado por la actividad a emprender, sea que se trate de faenas de prospección, exploración o explotación. Para estos efectos, el titular minero deberá presentar ante la autoridad de aplicación – Dirección de Minería – y antes del inicio de cualquier actividad especificada en el Artículo 249°, un Informe de Impacto Ambiental.

Este informe deberá contener:

- La ubicación y descripción ambiental del área de influencia.
- La descripción de proyecto minero.
- Las eventuales modificaciones sobre el suelo, agua, atmósfera, flora y fauna, relieve y ámbito sociocultural.
- Las medidas de prevención, mitigación, rehabilitación, restauración o recomposición del medio alterado, según correspondiere.
- Métodos utilizados.

Estos contenidos han sido desarrollados y profundizados en el Anexo III de las Normas Complementarias para la Implementación de la Ley N° 24.585 de Protección Ambiental para la Actividad Minera, Presupuestos Mínimos, aprobadas por el Decreto Provincial N° 1426-MPI y MA-1996.

En cuanto a las normas de Protección y Conservación Ambientales, para el desarrollo del IIA y de la evaluación ambiental se adoptarán los estándares de calidad de agua, aire y suelo contenidos en el Anexo IV del texto de las Normas Complementarias. Para efectos de verificar la calidad de los componentes ambientales regulados, el titular adoptará los procedimientos técnicos de muestreo y análisis indicados por la American Society For Testing Materials (ASTM) y la US Environmental Protection Agency (USEPA).

En lo particular, respecto a la línea base, el Informe de Impacto Ambiental contendrá los datos de unidades, caudales, concentraciones y tipos de constituyentes, en sus respectivos puntos de emisión, la distancia requerida para observar los puntos de verificación de cumplimiento y el método o modelo empleado para realizar la estimación.

Las actividades que quedan sujetas a esta obligación están descritas en el Artículo 249° del Código de Minería, el que señala lo siguiente:

“Las actividades comprendidas en la siguiente sección son:

Prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción y almacenamiento de sustancias minerales comprendidas en este Código de Minería, incluidas todas las actividades destinadas al cierre de la mina.

Los procesos de trituración, molienda, beneficio, pelletización, sinterización, brinqueteo, elaboración primaria, calcinación, fundición, refinación, aserrado, tallado, pulido, lustrado, otras que puedan surgir de nuevas tecnologías y la disposición de residuos cualquiera sea su naturaleza”.

Cabe señalar que otorgada que sea la Declaración de Impacto Ambiental que se deriva del Informe de Impacto Ambiental, nace para el titular minero la obligación genérica de cumplir con lo establecido en la misma y cada dos años presentar un Informe de Actualización de Impacto Ambiental. Este informe ameritará una nueva Declaración de Impacto Ambiental sólo en el evento que éste de cuenta de desajustes significativos entre los resultados esperados por la DIA y los efectivamente generados.

De la legislación reseñada, (Artículo 11° Decreto Provincial N° 1.426/1996), surge la obligación para el titular minero de informar todo accidente que ocurrido en el área de

influencia del proyecto que tenga incidencia sobre los equipos, instalaciones, sistemas, acciones y actividades enumeradas en el Artículo 13° del Título Complementario y que sus consecuencias importen riesgo grave para la salud de la población o para el medio ambiente. Esta obligación deberá cumplirse en forma inmediata y mediante comunicación fehaciente que comprenda el accidente, las medidas de mitigación adoptadas y el plan de contingencias propuesto. Aún cuando la norma no lo expresa, esta comunicación debiera ser por escrito.

Esta ley establece el principio de responsabilidad objetiva, por el cual todo el que cause daño al medio ambiente debe responder de él, sin que sea necesario que en la generación de dicho daño haya actuado con dolo o con culpa.

En efecto, de acuerdo al Artículo 263° del Código de Minería y, sin perjuicio de las sanciones administrativas y penales que establezcan las normas vigentes, todo el que causare daño actual o residual al patrimonio ambiental estará obligado a mitigarlo, rehabilitarlo, restaurarlo o recomponerlo según correspondiere.

Todo titular de un proyecto minero que ha obtenido la DIA y que cumple con los requisitos exigidos por la ley, está facultado a solicitar un Certificado de Calidad Ambiental que así lo acredite.

Con fecha 09 de Octubre de 1996, la Provincia de San Juan aprobó las normas complementarias de la Ley Nacional N° 24.585 haciéndolas aplicables a la Provincia, mediante Decreto Provincial 1.426, publicado en el Boletín Oficial el 25 de Noviembre de 1996. El decreto no introduce modificaciones ni establece nuevas regulaciones, sólo hace aplicables las normas descritas, transcribiendo las mismas.

Finalmente, en virtud del Decreto Provincial N° 589 de fecha 30 de Abril de 1996, y luego por Ley Provincial N° 6.800 sancionada el 19 de Junio de 1997, modificatoria de la Ley Provincial N° 6.571, sancionada el 25 de Noviembre de 1994, la Provincia de San Juan designó como autoridad de aplicación de la Ley de Protección Ambiental para la Actividad Minera en todo el ámbito de la Provincia de San Juan, al Departamento de Minería dependiente de la Subsecretaría de Minería, con intervención de la Subsecretaría de Política Ambiental.

8.2.4 Legislación Relacionada con la Conservación y Manejo de los recursos Hídricos

8.2.4.1 Ley Nacional N° 25.688, Régimen de Gestión Ambiental de Aguas

Publicación en el Boletín Oficial: 3 de Enero del 2003.

Esta ley tiene por objeto establecer los presupuestos ambientales mínimos para la preservación, aprovechamiento y uso racional de las aguas.

Para la gestión territorial de las aguas establece el concepto de cuencas hídricas, las que se define como la región geográfica delimitada por las divisorias de aguas que discurren hacia el mar a través de una red de cauces secundarios que convergen en un cauce principal único y las endorreicas. Esta unidad ambiental de gestión es indivisible.

Aún cuando no se establece expresamente, se entiende que la autoridad de aplicación de la norma será aquella competente en materia de aguas en cada provincia. En lo que interesa al proyecto minero Pascua-Lama, la utilización de las aguas en relación a los efectos de la ley comprende:

- La toma y desviación de aguas superficiales;
- El estancamiento, modificación en el flujo o la profundización de las aguas superficiales;
- La toma de aguas subterráneas, su elevación y conducción sobre tierra, así como su desviación;
- El estancamiento, la profundización y la desviación de aguas subterráneas, mediante instalaciones destinadas a tales acciones o que se presten para ellas.

Con el objeto de gestionar el uso del recurso, las acciones identificadas más arriba obligan al titular de la faena a obtener la correspondiente autorización de la Autoridad de Aplicación.

La autoridad nacional de aplicación tiene a su cargo las siguientes funciones:

- a) Determinar los límites máximos de contaminación aceptables para las aguas de acuerdo a los distintos usos;
- b) Definir las directrices para la recarga y protección de los acuíferos;
- c) Fijar los parámetros y estándares ambientales de calidad de las aguas;

- d) Elaborar y actualizar el Plan Nacional para la preservación, aprovechamiento y uso racional de las aguas, que deberá ser aprobado por ley del Congreso de la Nación. Dicho plan contendrá como mínimo las medidas necesarias para la coordinación de las acciones de las diferentes cuencas.

Asimismo la autoridad nacional, a pedido de la autoridad jurisdiccional competente, podrá declarar zona crítica de protección especial a determinadas cuencas, acuíferas, áreas o masas de agua por sus características naturales o de interés ambiental.

En atención a que la norma analizada no ha sido reglamentada, tal como lo dispone su Artículo 9º, sus disposiciones no tienen el carácter de operativas. No obstante ello, se asume que las competencias aquí establecidas serán responsabilidad del Departamento de Hidráulica, en su carácter de Autoridad de Aplicación Provincial en materia de aguas, y los estándares a cumplir, en la medida que el gobierno nacional no dicte las reglamentaciones ordenadas por el legislador, son las vigentes en la provincia, no obstante la Provincia de San Juan deberá adecuar su legislación a la nueva normativa.

8.2.4.2 Ley Provincial N° 4.392, denominada Código de Aguas

Publicación en el Boletín Oficial: 12 Junio de 1978.

Este Código tiene como objetivo la regulación del sistema de aprovechamiento, conservación y preservación de los recursos hídricos pertenecientes al dominio público.

Conforme a lo anterior y a lo dispuesto en el Código Civil, son bienes del Estado Provincial los ríos y sus lechos, todas las aguas que corren por sus cauces naturales con excepción de las vertientes que nacen y mueren dentro de una misma heredad particular, en cuyo caso pertenecen en propiedad, uso y goce al dueño de la misma.

En síntesis, son bienes del Estado Provincial todas las aguas que se deriven de los arroyos y ríos, ya sean afluentes de éstos o que se extraigan por medio de canales, acueductos y de cualquier otra obra pública, como asimismo las aguas de desagües después de haber salido de la propiedad privada y las que provengan de la desecación de ciénagas y drenajes en general.

En lo particular, son bienes del Estado los siguientes:

- 1) Arroyo del Pedernal
- 2) Río San Juan y sus afluentes
- 3) Estero de Zonda
- 4) Canal Centenario y sus afluentes
- 5) Canal 9 de Julio y sus afluentes
- 6) Los arroyos Tocota, Mondaca, Chita, Agua Negra, Arrequintín, Agua Blanca, Mondaquita, Conconta, Colangüil, Los Puentes, todos del Departamento de Iglesia y todo otro arroyo del mismo que tenga servidumbre de riego
- 7) Río Jáchal y sus afluentes
- 8) Arroyo del Agua Negra, en Jáchal
- 9) Río Bermejo y sus afluentes
- 10) Río de Huaco
- 11) Los ríos Valle Fértil, Chucuma, Astica, Las Tumanas, La Mesada, Usno, todos del departamento de Valle Fértil y todo otro arroyo del mismo que tenga servidumbre de riego.

En cuanto a la conservación y preservación del recurso hídrico, el Código de Aguas dispone que nadie podrá contaminar aguas públicas o privadas, sean corrientes o no, superficiales o subterráneas. Si la contaminación generada, independientemente del medio utilizado, genera efectos en la vegetación o calidad del suelo, ello significará una infracción grave que será sancionada en la forma prevista por el Código de Aguas, sin perjuicio de la inmediata cesación de la actividad prohibida.

En lo particular, se señala que está prohibido todo hecho u obra susceptible de contaminar o hacer inaptas las aguas subterráneas para el consumo humano, bebida de animales o para irrigación.

En este sentido, es condición sine qua non de funcionamiento de un pozo de explotación de agua que esta actividad, así como la perforación, no cause perjuicio a terceros y no ocasione cambios físicos o químicos que dañen las condiciones del acuífero o del suelo.

En cuanto al aprovechamiento del recurso hídrico, el Código de Aguas regula los modos de adquirir o constituir derechos sobre el uso del agua, los modos de extinción

y caducidad de los mismos, así como el procedimiento destinado a su constitución. Dentro de los usos contempla el uso común del agua, los permisos y la concesión.

El uso común, que no requiere autorización o pronunciamiento de la autoridad, consiste en: bebida, higiene humana, lavado de ropa y otros empleos reducidos, como bebida de animales domésticos y riego de huertos y jardines, siempre que la extracción de agua se efectúe sin uso de máquinas ni aparatos y sin deteriorar los márgenes, ni retener, demorar o acelerar el curso de las aguas, ni producir anegamientos o peligros de contaminación.

Este uso tiene prioridad sobre cualquier uso especial, debiendo todo concesionario, permisionario o autorizado respetar ese orden de prelación.

El permiso está concebido con un carácter temporal y transitorio y para el uso de pequeñas cantidades de agua.

Para los demás usos, entre los que se cuenta el uso minero y uso industrial, el Código de Aguas adoptó la figura jurídica de la concesión. Esta otorga el derecho subjetivo permanente al uso especial de aguas, obras, materiales en suspensión, o álveos y cauces públicos.

Para el otorgamiento de nuevas concesiones, la autoridad de aplicación se ajusta al siguiente orden de preferencia:

- 1) Usos domésticos, municipales, y abastecimiento de poblaciones, riegos de calles, carreteras, paseos y arbolados públicos; del servicio público de obras sanitarias y reparticiones autárquicas nacionales y provinciales; establecimientos de enseñanza rural y agrícola, así como todo otro establecimiento de propiedad de personas jurídicas públicas.
- 2) Uso medicinal
- 3) Uso recreativo
- 4) Uso industrial
- 5) Uso hidroenergético
- 6) Uso minero
- 7) Uso agrícola
- 8) Uso pecuario
- 9) Uso piscícola

Este orden de preferencia establecido por el Código de Aguas es aplicable para el otorgamiento del derecho y su ejercicio.

La autoridad de aplicación del Código de Aguas es el Departamento de Hidráulica.

8.2.4.3 Ley Provincial N° 5.824, sobre la Preservación de los Recursos de Agua, Suelo y Aire y Control de la Contaminación en la Provincia de San Juan, Decreto Provincial N° 638/1989 y su modificatorio Decreto Provincial N° 0841/2003

Ley Provincial N° 5.824: Boletín Oficial 27 de Noviembre de 1987.

Decreto Provincial N° 638/1989: Boletín Oficial 7 de Septiembre de 1989.

Decreto Provincial N° 0841/2003: Boletín Oficial 24 de Marzo de 2003.

La Ley N° 5.824/1987 denominada “Ley para la preservación de los Recursos de agua, suelo y aire y control de la contaminación en la Provincia de San Juan” está destinada fundamentalmente a la preservación del recurso “agua” y de manera muy general y soslayada al recurso suelo y aire.

Esta ley analizada hace obligatorio en todo el territorio provincial la adopción de las medidas necesarias para prevenir toda alteración de las aguas, tanto superficiales como subterráneas que se tornen nocivas para los usos a los que está destinada.

Quedan comprendidas por los alcances de esta ley las actividades industriales, comerciales, agropecuarias y de servicios que generen efluentes.

Todo establecimiento industrial radicado o a radicarse en la provincia, debe adecuar sus efluentes a las disposiciones de la presente ley y sus reglamentaciones. Se clasifica a los efluentes en tres categorías:

- Efluente Industrial
- Efluente Minero
- Efluente Doméstico

La Ley Provincial prohíbe la descarga de efluentes domésticos no tratados a cursos o cuerpos de agua superficial o subterráneo. La norma reglamentaria completa la norma

indicando que: “En ningún caso el destino de los efluentes domésticos, aún tratados será la red de riego. Tampoco a pozos absorbentes excavados o perforados, liberados a suelos (canchas de infiltración), que pudieran afectar a los acuíferos libres, semiconfinados o confinados y/o a cauces, salvo en los casos particulares debidamente analizados por la Autoridad del Departamento de Hidráulica y cuando no revistieran riesgo alguno. Fuera de esta situación, se ajustará a las condiciones de vuelco a red cloacal, cuando ésta existiere.”

La norma obliga al titular de un proyecto o actividad a:

- Adoptar las medidas necesarias para prevenir la alteración de las aguas.
- Obtener la autorización de la autoridad competente, previa a cualquier descarga.
- Obtener el empadronamiento del respectivo establecimiento industrial.
- Obtener el empadronamiento de su Planta de Tratamiento en los casos que corresponda.

La Ley Provincial N° 5.824, determina que será organismo de aplicación el Departamento de Hidráulica en lo relativo a descarga de efluentes de cualquier naturaleza, cuyos cuerpos receptores sean acuíferos, ríos, arroyos y todas las aguas que corren por cauces naturales. La autorización de la descarga industrial dispondrá el cumplimiento de los estándares que el reglamento establece, sea que se trate de residuos industriales o aguas servidas.

El Honorable Consejo de Hidráulica, en su carácter de autoridad de aplicación de la mencionada ley y por Acta N° 2.423/2004 aprueba la reglamentación para obtener la autorización de descarga correspondiente.

8.2.5 Legislación Relacionada a la Protección de los Recursos Patrimoniales

8.2.5.1 Ley Nacional N° 25.743 Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico y Decreto Reglamentario N° 1.022/2004

Ley Nacional N° 25.743: Boletín Oficial: 26 de Junio del 2003.

Decreto Reglamentario N° 1.022/2004: Boletín Oficial 12 de Agosto del 2004.

Esta ley resulta aplicable en todo el territorio de la Nación, siendo su objeto la preservación, protección y tutela del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico como

parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación y el aprovechamiento científico y cultural del mismo.

Además distribuye las facultades entre la Nación y las Provincias de la siguiente forma:

Serán facultades exclusivas del Estado Nacional:

- a) Ejercer la tutela del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. En orden a ello deberá adoptar las medidas tendientes a su preservación, investigación y a fomentar la divulgación.
- b) Ejercer la defensa y custodia del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico en el ámbito internacional, mediante la prevención y sanción de importaciones o exportaciones ilegales. En orden a ello deberá instrumentar las acciones para gestionar la devolución de los bienes arqueológicos y/o paleontológicos al correspondiente país de origen.

Son facultades exclusivas de las Provincias y del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires:

- a) Establecer la creación del organismo competente que tendrá a su cargo la aplicación de la ley de protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico o atribuir estas funciones a un organismo ya existente.
- b) Organizar en sus respectivas jurisdicciones un Registro de Yacimientos, Colecciones y Objetos Arqueológicos y un Registro de Yacimientos, Colecciones y Restos Paleontológicos, teniendo como base preferentemente la metodología adoptada por la Autoridad de Aplicación, a fin de facilitar la mejor coordinación nacional.
- c) Crear un Registro de Infractores en materia arqueológica y paleontológica.
- d) Otorgar, a través de sus organismos competentes, las concesiones para prospecciones e investigaciones.
- e) Adecuar sus legislaciones en materia de concesiones, infracciones y sanciones a fin de lograr centralizar y proporcionar dicha información a los organismos nacionales o provinciales que lo soliciten.
- f) Procurar la creación de delegaciones locales dentro de su ámbito jurisdiccional a fin de un cumplimiento más eficiente de lo dispuesto en la presente ley.
- g) Comunicar al Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano y al organismo nacional competente en materia paleontológica,

las concesiones otorgadas, como asimismo, las infracciones y las sanciones aplicadas a fin de lograr la centralización de la información.

- h) Comunicar al organismo competente nacional las autorizaciones otorgadas para el traslado fuera del país de colecciones y objetos arqueológicos o restos paleontológicos, para permitir su conocimiento y adopción de medidas necesarias para aquellos casos en los que deba gestionar su recuperación y retorno al país.

En cuanto al ejercicio del poder de policía la misma norma prevé que será conforme la distribución de competencias efectuada en la ley, y el Estado Nacional podrá ejercerlo en forma concurrente con las provincias a solicitud de éstas.

Establece la norma que los bienes arqueológicos y paleontológicos son del dominio público del Estado nacional, provincial o municipal, según el ámbito territorial en que se encuentren, conforme a lo establecido en los Artículos 2.339° y 2.340° inciso 9° del Código Civil y por el Artículo 121° y concordantes de la Constitución Nacional. Además crea un Registro Nacional de Yacimientos Arqueológicos y Paleontológicos y un Registro Oficial de Colecciones u Objetos Arqueológicos o Restos Paleontológicos.

8.2.5.2 Ley Provincial N° 6.801, Ley Marco sobre el Patrimonio Histórico Cultural y Decreto Provincial Reglamentario N° 1.134/2001

Ley Provincial N° 6.801: Boletín Oficial: 6 de Octubre 1997.

Decreto Provincial N° 1.134/2001: Boletín Oficial: 05 de Octubre del 2001.

El texto legal provincial tiene por finalidad conservar como testimonio para el conocimiento y desarrollo cultural de las generaciones futuras el Patrimonio Cultural y Natural de la Provincia de San Juan. Este está conformado por “todos aquellos bienes que, material y/o culturalmente, reportan un interés cultural, antropológico, prehistórico, arqueológico, etnológico, histórico, artístico, artesanal, monumental, documental y tecnológico que significan o pueden significar un aporte relevante para el desarrollo cultural de la Provincia de San Juan, que se encuentren en el territorio de la Provincia, cualquiera fuere su propietario, luego de su declaración como tales por ley de la Provincia”.

Para el fomento de la conservación del Patrimonio Cultural y Natural de la Provincia de San Juan, la ley reconoce cuatro grandes categorías de protección para estos bienes, a saber:

- Monumento Histórico Provincial
- Lugar Histórico Provincial
- Bienes Muebles de Interés Cultural y Natural
- Patrimonio Cultural Inmaterial

Para el fomento de su conservación, la ley provincial y su reglamento establecen la obligación de denuncia para hallare bienes arqueológicos o para el dueño o poseedor del bien. Como contrapartida establece beneficios tributarios.

La declaración de un bien como integrante del Patrimonio Cultural y Natural de la Provincia implica la prohibición de la destrucción total o parcial, demolición, ampliación o reconstrucción, en todo o en parte del mismo sin previa autorización de la Autoridad de Aplicación. Conforme la reglamentación provincial la Autoridad de Aplicación deberá expedirse sobre la autorización para alterar las condiciones del bien en un plazo perentorio de 15 días, vencido el cual, y sin que exista resolución o siendo esta negativa, el particular queda facultado a realizar solamente los trabajos que sean necesarios para la conservación del bien y aquellos trabajos que sean necesarios para evitar algún daño a terceros de conformidad a las disposiciones de los Artículos 2.616 y 2.499 apartado 2° del Código Civil.

Finalmente, se establecen una serie de restricciones y/o prohibiciones destinadas a preservar y conservar la integridad e inalterabilidad del bien. Así mismo, todo contrato o negocio que quiera ejecutarse sobre el bien, en relación con la tenencia, posesión o propiedad del bien, requiere de la vista de la autoridad de aplicación.

El hallazgo fortuito de bienes que presuntamente puedan ser significativos para el Patrimonio Cultural y Natural de la Provincia, deberán ser denunciados inmediatamente a la autoridad de aplicación o ante la Seccional policial más cercana.

La autoridad de aplicación es, de acuerdo al Artículo 8°, el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de San Juan, a través de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de San Juan.

8.2.6 Legislación Relacionada a la Protección de la Flora y Fauna

8.2.6.1 Ley Nacional N° 22.421, de Protección y Conservación de la Fauna Silvestre y su Decreto Reglamentario N° 666/1997. Ley Provincial N° 6.911, sobre la Flora y Fauna Silvestre

Ley Nacional N° 22.421: Boletín Oficial 12 Marzo 1981.

Decreto Nacional N° 666/1997: Boletín Oficial 25 de Julio de 1997.

Ley Provincial N° 6.911: Boletín Oficial 10 de Marzo de 1999.

Esta norma declara de interés público la fauna silvestre que temporal o permanentemente habita el territorio de la República, así como su protección, conservación, propagación, repoblación y aprovechamiento racional.

Como consecuencia de lo anterior, todos los habitantes de la Nación tienen el deber de proteger la fauna silvestre. En función de ello, queda regulado por la presente ley la caza, hostigamiento, captura o destrucción de sus crías, huevos, nidos y guaridas, tenencia, posesión, tránsito, aprovechamiento, comercio y transformación de la fauna silvestre y sus productos o subproductos.

En lo particular establece que los estudios de factibilidad y proyectos de obras tales como desmontes, secado y drenaje de tierras inundables, modificaciones de cauce de río, construcción de diques y embalses, que puedan causar transformaciones en el ambiente de la fauna silvestre, deberán ser consultados previamente a las autoridades nacionales o provinciales competentes en materia de fauna.

El Poder Ejecutivo Nacional y las provincias tienen a su cargo la aplicación de las disposiciones de la presente ley en sus respectivas jurisdicciones.

En el ámbito provincial se encuentra vigente la Ley Provincial N° 6.911 denominada Ley sobre la Flora y Fauna Silvestre, la cual tiene como bienes protegidos las áreas naturales, la flora, la fauna silvestre y la fauna ictícola. Esta ley es también tratada en este capítulo.

8.2.6.2 Ley Nacional N° 22.351, sobre Parques y Reservas Nacionales y Monumentos Naturales

Publicación Boletín Oficial: 12 Diciembre 1980.

El texto de la presente ley establece el régimen legal y sistema de declaración de Parques, Reservas Nacionales y Monumentos Naturales que por sus extraordinarias bellezas o riquezas en flora y fauna autóctona o en razón de un interés científico determinado deban ser protegidas y conservadas para investigaciones científicas, educación y goce de las presentes y futuras generaciones, con ajuste a los requisitos de Seguridad Nacional.

Define las categorías de áreas protegidas, su administración, la autoridad de aplicación y las facultades de éstas.

Esta ley establece 3 categorías de áreas protegidas, los Parques Nacionales, los Monumentos Nacionales y las Reservas Nacionales. En lo particular, interesa destacar:

Parques Nacionales serán las áreas a conservar en su estado natural, que sean representativas de una región fitozoogeográfica y tengan atractivo en bellezas escénicas o interés científico, las que serán mantenidas sin otras alteraciones que las necesarias para asegurar su control, la atención del visitante y aquellas que correspondan a medidas de Defensa Nacional, adoptadas para satisfacer necesidades de Seguridad Nacional.

Se encuentra prohibida toda explotación económica con excepción de la vinculada al turismo, la cual se ejercerá con sujeción a las reglamentaciones que dicte la autoridad de aplicación; especialmente se menciona la prohibición de desarrollar exploraciones y explotaciones mineras.

La declaración de un Parque Nacional en el territorio de una Provincia, conlleva la necesaria cesión de los terrenos provinciales a la Nación.

Reservas Nacionales serán las áreas que interesan para la conservación de sistemas ecológicos, el mantenimiento de zonas protectoras del parque nacional contiguo, para

la creación de zonas de conservación independientes, cuando la situación existente no requiera o admita el régimen de un parque nacional.

Conforme al texto legal, en estas áreas podrán desarrollarse trabajos de carácter comercial e industrial e incluso extractivas, como la explotación de canteras, pero queda prohibida cualquier otra explotación minera.

Monumentos Naturales: Son las áreas, cosas, especies vivas de animales o plantas, de interés estético, valor histórico o científico, a los cuales se les acuerda protección absoluta, son inviolables, no pudiendo realizarse en ellos o respecto a ellos actividad alguna, con excepción de las inspecciones oficiales e investigación científicas permitidas por la Autoridad de Aplicación, y la necesaria para su cuidado y atención de los visitantes.

El control y vigilancia de los Parques Nacionales, Reservas Nacionales o Monumentos Naturales, inherentes al cumplimiento de las normas emanadas de la presente ley, su decreto reglamentario y los reglamentos dictados por la autoridad de aplicación, estarán a cargo de un Cuerpo de Guardaparques Nacionales.

La autoridad de aplicación de la ley es la Administración de Parques Nacionales.

8.2.6.3 Ley Provincial N° 6.911, sobre la Flora y Fauna Silvestre

Publicación Boletín Oficial: 10 Marzo 1999.

El objetivo de la presente ley es “Proteger, conservar, propagar, repoblar, generar y promover el aprovechamiento sustentable de la flora, fauna silvestre, fauna ictícola así también la creación, fiscalización y desarrollo de las Áreas Naturales Protegidas a fines de preservar la biodiversidad y los ecosistemas en todo el territorio de la Provincia de San Juan”. En consecuencia con lo anterior, a continuación se describe el contenido legal para estos dos aspectos.

La ley declara que los ambientes naturales y sus recursos constituyen un patrimonio natural de fundamental valor cultural e importancia socio – económica, por lo que se declara de interés público su conservación y/o preservación. Así también, se declara de interés público a la fauna silvestre que temporal o permanentemente habita el

territorio de la provincia. Lo mismo ocurre con la preservación, propagación, restauración, población, repoblación y aprovechamiento racional de la flora silvestre. Como consecuencia de lo anterior, la norma establece como acciones de especial relevancia las siguientes:

- La protección de ecosistemas, hábitat terrestres y acuáticos que alberguen especies silvestres y los ambientes que los circundan, nacientes y cursos de agua, para garantizar su dinámica natural y subsistencia a perpetuidad, especialmente aquellos de cuya conservación dependa la supervivencia de especies migratorias, raras y amenazadas.
- La preservación de muestras representativas del paisaje natural, rasgos fisiogeográficos, formaciones geológicas o áreas de interés científico y educativo.
- Las acciones dirigidas a controlar la degradación de los suelos.
- La protección de los hábitats de reproducción y alimentación de especies silvestres, en especial las especies migratorias.
- La elaboración de planes de manejo a cada área protegida, estableciendo las categorías de manejo que corresponda a cada una.
- La construcción de diques, presas o embalses; desmonte, secado y drenaje de tierras inundables; modificación de cauces de ríos o cualquier otra construcción que pueda modificar el medio natural y con ello perjudicar la flora, la fauna silvestre y la fauna ictícola.
- El vertido o emanación en los recursos naturales de cualquier sustancia, que fuera nociva para la flora, fauna silvestre y fauna ictícola y su hábitat.
- La verificación del cumplimiento de lo dispuesto por esta ley en todas sus instancias.

Considerando los fines de protección que enmarcan las acciones aludidas en el párrafo anterior, la ley dispone de dos mecanismos de protección. Por una parte establece la protección de las especies de fauna silvestre como individuos, definiendo seis categorías de manejo a modo de distinguir y priorizar su importancia y conservación. Entre las categorías se reconocen:

- Especies en peligro de extinción.
- Especies amenazadas.
- Especies vulnerables.
- Especies no amenazadas.

- Especies insuficientemente conocidas.
- Especies Protegidas.

Además la ley dispone la prohibición de la caza de animales de la fauna silvestre, el hostigamiento, la destrucción de su hábitat, refugios, nidos y huevos.

Como segundo instrumento, la ley dispone áreas cuyo objetivo es la protección del hábitat en su integridad. Para ello, el texto legal establece distintas categorías de manejo de las áreas naturales. Específicamente y con relación a la Reserva de la Biósfera establece lo siguiente:

“Reserva de la Biósfera. Considérase Reserva de la Biósfera aquellas áreas representativas de ecosistemas característicos, cuyo objetivo es articular la absoluta protección con la producción sostenible y en las cuales las autoridades científicas y población local operan en la creación de un modelo que satisfaga las necesidades humanas y la conservación de la naturaleza. Todas las áreas de esta categoría deberán ser sometidas a la aprobación del Consejo Internacional de Coordinación del Programa sobre el Hombre y la Biósfera de las Naciones Unidas, para lo cual el Poder Ejecutivo arbitrará las acciones”.

Para los efectos del análisis sobre la Reserva de Biósfera San Guillermo, los temas relevantes tratados en esta ley son los siguientes:

- 1) Se crea el “Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas” integrada por todas las áreas naturales protegidas existentes en la Provincia de San Juan, a la fecha de promulgación de la presente ley, y las que se crearen por leyes posteriores (Artículos 4° y 20°).
- 2) Se crean “Categorías de Manejo” de Áreas Naturales Protegidas (Artículos 4° y siguientes), distinguiéndose las siguientes:
 - Reserva Natural Estricta
 - Parques Naturales
 - Monumentos Naturales
 - Reserva Natural Manejada
 - Paisaje Protegido
 - Reserva de Uso Múltiple
 - Reserva de la Biósfera

- Sitios de Patrimonio Mundial
- 3) Las Áreas Naturales Protegidas podrán tener más de una de las categorías referidas anteriormente.
 - 4) Se define como autoridad de aplicación de esta Ley a la Subsecretaría de Política Ambiental, actualmente Subsecretaría de Medio Ambiente.
 - 5) Respecto a la creación de áreas protegidas y asignación de una o más categorías de manejo específicas se establece:
 - A partir de la promulgación de la Ley N° 6.911, las nuevas áreas protegidas debieran crearse por Ley Provincial con una o más categorías de las descritas en la misma.
 - A partir de esta ley el Estado Provincial puede crear Áreas de Reservas en dominios privados pero deberá acordar con el particular la categoría de manejo de dicha área y sólo así limitar el derecho de propiedad que tiene el titular de dominio.
 - Respecto a las áreas protegidas ya existentes, la ley establece:
 - En su Artículo 20° que “a partir de la promulgación de la presente ley, las Áreas Naturales Protegidas existentes en la Provincia de San Juan, deberán adecuarse a las exigencias establecidas en su normativa e integrarán junto a las que se crearen por ley posteriores al Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas (...)”
 - En su Artículo 29° que “en un plazo no mayor de 365 días posteriores a la promulgación de la Ley, la autoridad de aplicación creará el mapa biogeográfico y de las áreas naturales protegidas que, previa clasificación, constituirán el sistema provincial de áreas naturales protegidas. Generará los planes de manejo respectivos a fin de posibilitar únicamente las actividades que no impacten en las diversas áreas naturales clasificadas”.
 - En su Artículo 19° que “Las áreas naturales protegidas integrantes del Sistema Provincial de Áreas Protegidas podrán tener más de una de las categorías establecidas en la presente Ley. La Autoridad de Aplicación realizará la zonificación pertinente en virtud de lo que establezca el Plan de Manejo para cada Área, designándola con el nombre de las categorías que mayor superficie posea”.
 - La ley define como “Plan de Manejo” a “el conjunto de decisiones y acciones programadas y formalmente aprobadas por las autoridades

competentes, destinadas a la conservación y administración de los elementos naturales que contengan las áreas protegidas en beneficio del hombre, propendiendo a su uso sostenido”.

Respecto a la creación de Planes de Manejo en dominios privados, es necesario resaltar el concepto de participación y consenso de los propietarios particulares en la elaboración del plan de manejo, recogido en el Artículo 21° de la Ley N° 6.911, que establece que “La Autoridad de Aplicación podrá iniciar las actuaciones para crear áreas protegidas en dominios privados; por su intermedio podrán hacerlo municipios y particulares, propietarios de dominio de “interés ambiental” que convengan con las autoridades de aplicación el manejo de la propiedad, de acuerdo a las categorías de manejo establecidas en la presente Ley y conforme a las limitaciones que la legislación de fondo determina”.

La Ley Provincial N° 6.912 establece el régimen sancionatorio a las transgresiones de los contenidos de la Ley N° 6.911.

8.2.6.4 Reserva Provincial San Guillermo

Decreto Ley N° 2.164 de la Reserva Provincial de San Guillermo

El Área de Reserva Provincial San Guillermo fue creada por Decreto Ley Provincial 2164-E-72 del 22 de Junio de 1972, el cual: i) constituyó el Área de Reserva Provincial “San Guillermo”, ii) fijó los límites iniciales del Área de Reserva, i.e.) fijó los objetivos de la misma, estableciendo expresamente que la Reserva Provincial está destinada a la conservación de los recursos renovables, en especial la vicuña y de las principales características fisiogeográficas, asociaciones bióticas y el equilibrio biológico y iv) determinó las actividades prohibidas dentro del área, a saber: a) la quema de campos y la tala de especies arbóreas, b) la caza y la pesca y c) la introducción de flora y fauna exóticas.

Ley Provincial N° 3.845

Esta Ley, que hoy se encuentra derogada se describe a continuación a efectos de exponer en el TO una relación completa de lo que ha sido la conformación de la Reserva Provincial San Guillermo.

- La Ley Provincial N° 3.845 sancionada el 04 de agosto de 1973 tuvo por finalidad primordial conservar, repoblar y aprovechar racionalmente los recursos faunísticos en toda la Provincia de San Juan, con especial atención a los pelíferos y los camélidos.
- Por tal motivo a través de su artículo 11 se determinó expresamente: “El Poder Ejecutivo declarará las zonas de reserva, refugios, o parques naturales, destinados a la conservación integral de la fauna silvestre en su hábitat natural, debiendo expropiar o recuperar áreas fiscales, las que serán destinadas a los fines previstos en la presente ley”.
- Es decir que a partir de esta ley, y con anterioridad también conforme al derecho positivo, el Estado Provincial queda obligado a expropiar aquellas zonas que pretendiera constituir como área de reserva y es en virtud de esta norma que más adelante se dicta la Ley N° 4.164, por la que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el área de la Reserva Provincial San Guillermo, delimitada en el Decreto Ley N° 2.164-E-72.
- La Ley Provincial N° 3.845 del año 1973 fue derogada por imperio de la Ley Provincial N° 6.911, Ley de Flora, Fauna y Áreas Naturales Protegidas; manteniéndose plenamente vigente hasta el año 1999.

Ley Provincial N° 4.164, Declara de Utilidad Pública Estancia San Guillermo

Publicación Boletín Oficial: 29 de Diciembre de 1975.

La Provincia de San Juan sancionó la Ley Provincial 4.164, el 23 de Diciembre de 1975, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación, el campo denominado “Estancia de San Guillermo”, considerada reserva natural provincial destinada, principalmente, a la protección de la vicuña (Artículos 1° y 2°). El campo delimitado encierra una superficie de 981.460 ha.

Ley Provincial N° 5.949, Desafecta de la Declaración de Utilidad Pública de la Estancia San Guillermo, el inmueble denominado “Campo Las Taguas”

Publicación Boletín Oficial: 10 de Marzo de 1997.

Mediante Ley Provincial N° 5.949 sancionada el 08 de Marzo de 1989, se desafecta de la declaración de utilidad pública realizada por Ley Provincial N° 4.164, a la parcela

identificada con Nomenclatura Catastral N° 17-90-650100, con una superficie aproximada de 125.680 ha, conocido como “Campo Las Taguas”.

Constitución del Área de Reserva de Biosfera San Guillermo:

- En fecha 05 de Agosto de 1980 el Gobierno Provincial eleva al Presidente del Comité Intergubernamental del programa “El Hombre y la Biosfera” la solicitud para que la Reserva Provincial San Guillermo sea presentada como Reserva de la Biosfera.
- A tal pedido se adjunta: i) un documento de Reseña de la reserva Provincial San Guillermo, informando que fue creada por Decreto N° 2.164 y que en fecha 24/12/75 se sanciona la Ley N° 4.164, mediante la que se declara el área de utilidad pública y sujeta a expropiación y ii) formulario de propuesta de Reserva de Biosfera en el que se determinan dos zonas: la Núcleo de aproximadamente 42.000 has. y la Manipulativa o de Amortiguación, ubicada en el resto de la Reserva y de aproximadamente 939.000 has. En dicho formulario se destaca que en el ítem: “Modificación por el Hombre” punto b) “Utilización del territorio/ Influencia de la Actividad del Hombre”, se reporta como única actividad en la zona a la Minería.

Declaración de UNESCO de Constitución de Área de Reserva de Biosfera:

- En fecha 17 de febrero de 1981 el Director General de UNESCO certifica que la Reserva de la Biosfera de “San Guillermo” Provincia de San Juan, forma parte integrante de la red internacional de reservas de la Biosfera.
- A partir de este momento la Reserva Provincial San Guillermo, denominada Reserva de la Biosfera de San Guillermo es parte del Programa MAB de la UNESCO, “El hombre y la Biosfera”, la que está regida a nivel internacional por el Marco Estatutario de Sevilla.
- Conforme al artículo 3 del Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de Biosfera, las áreas de reserva de la biosfera, bajo el Programa MAB, deben combinar las siguientes tres funciones:
 - a) Función de Conservación: En virtud de la cual, se protege los paisajes, los ecosistemas, las especies y la variación genética.
 - b) Función de Desarrollo: En virtud de la cual, se busca que las áreas de biosfera sean usadas como modelos de desarrollo sustentable.

- c) Función de Apoyo logístico: En virtud de la cual, se busca que las reservas de biosfera sean usadas para prestar apoyo a proyectos de investigación, observación, educación y entrenamiento.
- Conforme a lo señalado en el artículo 4 del Marco Estatutario, para llevar adelante el Programa MAB sobre las actividades de conservación y desarrollo sustentable de recursos naturales, las áreas de biosfera están divididas en tres zonas interrelacionadas:
 - a) Una o varias zonas núcleos, jurídicamente constituidas, donde los paisajes, ecosistemas y especies son protegidos conforme al objetivo de “conservación”.
 - b) Una o varias zonas tampón, donde sólo pueden tener lugar actividades compatibles con los objetivos de conservación de las(s) zonas(s) núcleo, como por ejemplo actividades experimentales de investigación; y
 - c) Una zona exterior de transición donde se fomenten y desarrollen formas de explotación sostenible de los recursos.
- Dado el rol que se ha dado a las reservas de la biosfera, es decir, el de promover el desarrollo sustentable de los recursos naturales, el Programa MAB de UNESCO anticipa que las áreas de transición son de especial significado económico para el desarrollo regional.

Conclusión

De la interpretación legal integrada y armónica del marco normativo vigente al momento de la desafectación del Campo Las Taguas, se determinó que, legalmente, este campo había quedado fuera de los límites del Área de Reserva Provincial San Guillermo y teniendo en cuenta que el área de Biosfera San Guillermo fue creada sobre la base de la Reserva Provincial San Guillermo, cualquier modificación a esta última importa una modificación de la reserva de Biosfera San Guillermo, tanto en su dimensión de área integrante del Programa MAB UNESCO como en su dimensión de categoría de Manejo en la Provincia de San Juan, a partir de la vigencia de la Ley Provincial N° 6.911.

Es por ello que: habiendo el Estado Provincial modificado los límites del Área de Reserva Provincial San Guillermo, lo que en virtud de la normativa vigente en los años 1989 y 1997 fue legalmente posible materializar a través de la Ley Provincial N° 5.949 y por aplicación de la Ley N° 3.845, vigente hasta el año 1999, en que es derogada por la N° 6.911; la hoy categoría de manejo provincial “Área de reserva de

Biosfera San Guillermo” debe tener los límites determinados por la exclusión del campo Las Taguas sancionada por la Ley Provincial N° 5.949.

Ley Provincial N° 6.788, Aprueba Convenio Cesión Fracción Parque Provincial San Guillermo

Publicación en el Boletín Oficial: 10 de Marzo de 1997.

En fecha 11 de Octubre de 1996 se celebra entre la Nación Argentina y la Provincia de San Juan un convenio que tiene por objeto lograr la articulación de acciones que tiendan a la conservación de la diversidad biológica y a promover el desarrollo sustentable de la “Reserva de San Guillermo”, tal como prevé la figura de Reserva de la Biósfera. En este convenio destaca:

- 1) La delimitación de dos áreas: Una de 170.000 ha (conocida como Zona Núcleo) que la Provincia cede a la Nación para los fines de su incorporación bajo la categoría de Parque Nacional. La otra, considerada como Zona de Amortiguación, delimitada en la cláusula Segunda y que según dicha delimitación tiene una superficie aproximada de 250.000 ha. En ésta la Provincia se compromete a establecer una normativa que regule las actividades humanas de tal forma que éstas no tengan consecuencias o repercusiones ambientales en la zona objeto de la cesión.
- 2) El compromiso de elaboración de un plan maestro de manejo orientado a alcanzar el mayor grado de conservación de la Reserva de la Biósfera San Guillermo.
- 3) La obligación de constituir un equipo de trabajo (Comité de Gestión), integrado por la Nación, a través de la Administración de Parques Nacionales, la Provincia y la Fundación Ambientalista Sanjuanina, con los fines de cumplir con el compromiso indicado en el acápite 2 y que podrá ser asistido por un Comité Consultivo, integrado por representantes del ámbito municipal, académico, de organizaciones no gubernamentales o de otras entidades que acreditando idoneidad o interés institucional sean invitadas a integrarlo.

Este convenio es ratificado en todas sus partes por Decreto Provincial N° 1.469 de fecha 18 de Octubre de 1996.

La Ley Provincial N° 6.788, sancionada el 13 de Febrero de 1997:

- 1) Aprueba el Convenio Nación Provincia.

- 2) Se cede a la Nación para su incorporación al Régimen Legal de Parques Nacionales establecido en la Ley Nacional 22.351, la fracción del Parque Provincial San Guillermo identificada como Zona Núcleo.
- 3) Se faculta al Cuerpo de Guardaparques Nacionales afectados a la zona, para ejercer el poder de policía en materia de administración de los recursos naturales, establecidos en la legislación provincial vigente, en el área integrante de la Reserva de la Biósfera San Guillermo, no cedida la Nación.

Ley Nacional N° 25.077, de Creación del Parque Nacional San Guillermo

Publicación en el Boletín Oficial: 19 Enero 1999.

Mediante esta ley, sancionada con fecha 09 de Diciembre de 1998, el Honorable Congreso de la Nación aprueba el Convenio suscrito entre la Provincia de San Juan y el Estado Federal, a través de la cual éste acepta la cesión de terrenos provinciales efectuada y crea el Parque Nacional “San Guillermo” y somete esta área al régimen legal de Parques Nacionales.

8.2.7 Legislación Ambiental Relacionada a la Infraestructura Requerida

8.2.7.1 Ley Nacional N° 13.660, Dicta Normas a que Deberán Ajustarse las Instalaciones de Elaboración, Transformación y Almacenamiento de Combustibles, Decreto Reglamentario N° 10.887 y Decreto Nacional N° 1.212/1989

Ley Nacional N° 13.660: Boletín Oficial 4 Noviembre 1949.

Decreto Nacional N° 1.212/1989: Boletín Oficial 14 de Noviembre de 1989.

El Decreto Nacional N° 1.212, sancionado el ocho de Noviembre de 1989 fijó como objetivo la desregulación del sector de hidrocarburos, manteniendo vigente las normas aplicables en cuanto al almacenamiento de los mismos.

La Ley Nacional N° 13.660 y su Decreto Reglamentario, disponen que la construcción, ampliación o modificación de depósitos de combustibles (líquidos, gaseosos o sólidos minerales) estará sujeto a la autorización del Poder Ejecutivo y deberán ajustarse, en todo, a las normas que para este efecto se dicten.

La autoridad de aplicación de la presente norma y de las resoluciones referidas en los puntos siguientes es la Secretaría de Energía de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

Tanto la ley analizada como las resoluciones que a continuación se exponen son de aplicación en todo el territorio nacional y no requieren por parte de la Provincia adhesión a las mismas.

8.2.7.2 Resolución N° 1102/04 de la Secretaría de Energía

Publicación en el Boletín Oficial: 05 de enero de 2005.

La Resolución N° 1102/2004, sancionada en fecha 03/11/04 por la Secretaría de Energía de la Nación, creó el “Registro de Bocas de Expendio de Combustibles Líquidos, Consumo Propio, Almacenadores, Distribuidores y Comercializadores de Combustibles e Hidrocarburos a Granel y de Gas Natural Comprimido”, siendo obligatoria la inscripción en dicho registro para la correcta habilitación y funcionamiento de la planta de almacenamiento de combustibles. Su falta esta sancionada con multa establecida al efecto.

En dicho Registro quedan incorporadas las personas físicas o jurídicas que a la fecha de entrada en vigencia de la resolución se encuentran inscriptas en el Registro de Bocas de Expendio de Combustibles Líquidos y Bocas de Expendio de Fraccionadores y Revendedores de Combustibles a Grandes Consumidores, creado por la Resolución N° 79-SE-99, derogada por la Resolución N° 1102/04.

Además y específicamente el artículo 11 de la Resolución N° 1102/04 se expresa: *“Quedan comprendidos en la presente resolución: ...d) los titulares de almacenamientos de combustibles para consumo privado, pertenecientes a entidades públicas o privadas, localizados en puertos, aeropuertos dársenas, industrias, playas de maniobra, estacionamientos, garajes o en cualquier otro sitio.”*

La inscripción se realizará acompañando información técnica que documente el almacenamiento, la que tendrá el carácter de Declaración Jurada.

El registro mencionado tiene el siguiente objetivo:

- Monitorear el mercado de combustibles;
- Promover una leal competencia en el sector;
- Colaborar con el control fiscal;
- Asegurar la calidad de los combustibles y subproductos suministrados;
- Controlar el cumplimiento de la normativa vigente.

8.2.7.3 Resolución N° 404/1994 de la Secretaría de Energía

Publicación en el Boletín Oficial: 29 Diciembre 1994.

Esta resolución dispone la obligación de efectuar auditorias anuales y verificaciones previas por empresas autorizadas, sobre los estanques de almacenamiento con el objeto de verificar su hermeticidad. Estas auditorías serán realizadas por quienes figuren en los registros correspondientes de la autoridad de aplicación.

8.2.7.4 Ley Nacional N° 20.429, Ley Nacional de Armas y Explosivos – Sustitución de la Ley N° 13.945. Decreto Reglamentario Parcial N° 302/1983, sobre Reglamentación Parcial de Pólvoras, Explosivos y Afines

Ley Nacional N° 20.429: Boletín Oficial 5 Julio 1973.

Decreto Reglamentario Parcial N° 302/1983: Boletín Oficial 28 de Febrero de 1983.

La adquisición, uso, tenencia, portación, transmisión por cualquier título, transporte, introducción al país e importación de armas de fuego y de lanzamiento a mano o por cualquier clase de dispositivo, agresivos químicos de toda naturaleza y demás materiales que se clasifiquen como armas de guerra, pólvoras, explosivos afines, y armas, municiones y demás materiales clasificados de uso civil, quedan sujetos en todo el territorio de la Nación a las prescripciones de la presente ley.

En lo relevante, esta norma dispone las obligaciones y condiciones que deberán cumplirse para el transporte, la utilización y almacenamiento de pólvoras, explosivos y afines.

Los importadores, exportadores, fabricantes, usuarios y todo aquel que se dedique al comercio, industrialización y empleo de pólvoras, explosivos y afines, deberán

inscribirse en el registro que organizará el Ministerio de Defensa de acuerdo con la reglamentación, la que determinará los requisitos y condiciones de la inscripción y documentación correspondiente.

El almacenamiento de pólvoras, explosivos y afines debe efectuarse en locales previamente autorizados por el Ministerio de Defensa. La reglamentación determinará las condiciones de emplazamiento de los mismos y sus características, la cantidad máxima a depositar en cada uno de ellos y toda otra exigencia de seguridad y vigilancia.

En lo referente a pólvoras, explosivos y afines la autoridad de aplicación era la Dirección General de Fabricaciones Militares. Por Decreto N° 037/2001 se reasignan funciones de la Dirección General de Fabricaciones Militares al Ministerio de Defensa “Registro Nacional de Armas” (RENAR).

8.2.7.5 Ley Nacional N° 24.449, Ley de Tránsito, y Decreto Nacional Reglamentario N° 779/1995, Resolución Nacional N° 195/1997. Ley Provincial de Adhesión N° 6.684, Decreto Provincial Reglamentario N° 326/1997 y demás normas reglamentarias

Ley Nacional N° 24.449: Boletín Oficial 10 de Diciembre de 1995.

Decreto Nacional N° 779/1995: Boletín Oficial 29 de Noviembre de 1995.

Ley Provincial N° 6.684/1996: Boletín Oficial 1 de Febrero de 1996.

Decreto Provincial N° 250/06: Boletín Oficial 1 de Marzo de 2006.

Resolución Nacional N° 195/1997: Boletín Oficial 29 de Julio de 1997.

La presente normativa establece los principios que regularán el uso de las vías públicas; los requisitos que deberán satisfacer quienes opten por la licencia de conducir; las condiciones de seguridad vial que deberán reunir las vías de tránsito conforme al estándar o tipo de ruta que se trate; la necesidad de obtener las autorizaciones pertinentes para realizar obras en la vía pública. Dispone también que todo vehículo destinado al tránsito deba cumplir las condiciones activas y pasivas, de emisión de contaminantes y condiciones de seguridad que establezca la ley y su reglamentación. Establece, además, las reglas que aplican a los vehículos de transporte, esto es:

- Circular en condiciones adecuadas de seguridad.

- La antigüedad del vehículo debe corresponder a las limitaciones de uso, tipo y cantidad de carga y velocidad, es decir, de 10 años para las sustancias peligrosas, de veinte años para otro tipo de carga.
- Cumplir los estándares en cuanto al ancho, largo y alto del vehículo.
- Cumplir con el peso máximo.

En forma especial, esta ley hace aplicable la Ley N° 24.051, sobre Residuos Peligrosos, al transporte de sustancias peligrosas, indicado en su Artículo 56° inciso h, que los transportistas, *“...deberán estar previstos de los elementos distintivos y de seguridad reglamentarios, ser conducidos y tripulados por personal con capacitación especializada en el tipo de carga que llevan y ajustarse en lo pertinente a las disposiciones de la Ley N° 24.051”*.

Finalmente, establece los procedimientos a que se ajustarán las infracciones a la presente ley y las sanciones que les serán aplicables a los infractores.

Cabe destacar que el Decreto Nacional Reglamentario en su Artículo 56° inciso “h” dispone: *“Los transportes de sustancias y residuos peligrosos cumplirán con las disposiciones de la Ley N° 24.051, su reglamentación y con el Reglamento General para el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera, que como anexo S, forma parte de la presente reglamentación”*.

El Reglamento General para el Transporte de Mercadería Peligrosa por Carretera (Anexo S del Decreto Nacional N° 779/1995 con las modificaciones incorporadas por la Resolución Nacional N° 195/1997), define como sustancias peligrosas aquellas consideradas tales por presentar riesgos para la salud de las personas, para la seguridad pública o para el medio ambiente.

Las mismas se encuentran catalogadas en la Clasificación y Numeración en las Recomendaciones para el Transporte de Mercancías Peligrosas de las Naciones Unidas y en el listado aprobado en el ámbito del MERCOSUR denominado “Acuerdo sobre Transporte de Sustancias Peligrosas y sus Anexos”, que incluye códigos de riesgo y las cantidades exentas de sustancias.

La clasificación de los materiales peligrosos se ha realizado conforme el riesgo que presentan. Las clases de riesgos han sido definidas por la Autoridad de Aplicación en la Resolución N° 195/1997, que incorpora estos conceptos al Decreto Nacional Reglamentario N° 779/1995, Anexo S.

En cuanto al Transporte de Mercancía Peligrosa por vía aérea o marítima, el Artículo 6° del Decreto Nacional Reglamentario N° 779/1995, establece que el ingreso y egreso de mercancías peligrosas por vía aérea son aceptados si se realizan conforme a las exigencias de la Organización para la Aviación Civil Internacional (OACI) y en el caso de transporte por vía marítima de acuerdo a las exigencias establecidas por la Organización Marítima Internacional (OMI).

En esta línea de pensamiento, esta norma en su Artículo 8° dispone que son aceptadas las certificaciones habilitaciones, licencias, aprobaciones o informes de ensayo expedidos en otros países, siempre que estos tengan, al menos, idénticas exigencias que las normas nacionales.

Cabe destacar que en la Provincia de San Juan, resulta aplicable la Ley Nacional N° 24.449; el Decreto Nacional Reglamentario N° 779/95 y sus anexos, es aplicable en forma supletoria en todo aquello que no está expresamente previsto en el Decreto Provincial N° 250/06.

8.2.7.6 Decreto N° 1.544-MOSP y MA/2002, sobre Seguridad y Control de Presas

Publicación en el Boletín Oficial: 9 de Diciembre del 2002.

El Decreto N° 1.544-MOSP y MA/02, publicado en el Boletín Oficial en fecha 9 de Diciembre del 2002, establece como función indelegable del Estado la de controlar las presas en todas las fases de su existencia física, por intermedio de un organismo técnico especializado, designando a la Dirección de Recursos Energéticos como Autoridad de Aplicación de la Seguridad y Control de Presas.

Quedan comprendidas dentro del ámbito de este Decreto todas las obras de presas y embalses sean públicos o privados, como así también todo terraplén o estructura para cualquier propósito que de hecho embalse o pueda embalsar cualquier fluido.

Los objetivos de la Autoridad de Aplicación están específicamente detallados y consisten en: a) Instrumentar los mecanismos necesarios para garantizar la seguridad de las presas; b) Ejercer el poder de policía en materia de seguridad de presas en el ámbito de su competencia con las atribuciones y responsabilidades de Autoridad de Aplicación.

Para el cumplimiento de los mencionados objetivos, el Decreto establece como funciones de la Autoridad de Aplicación: a) Intervenir, en lo referido a la seguridad y control de presas, en la aprobación de las obras de presas de embalses, públicas y privadas en sus distintas etapas de proyecto, construcción, funcionamiento, puesta fuera de servicio, mantenimiento y operación; b) Realizar la inspección de las presas de embalses en las distintas etapas de su existencia física.

Cabe destacar que este Decreto se encuentra integrado por el Reglamento Técnico sobre Seguridad y Control de Presas (Anexo A, el cual establece la normativa técnica a cumplir para la seguridad de las presas).

El Plan de Acción Durante Emergencias (P.A.D.E.) exigido por el Decreto N° 1.544/02 será complementado con el Plan de Emergencia Provincial – Decreto Provincial N° 1.805/00 al tramitarse el permiso sectorial respectivo ante la Dirección Provincial de Recursos Energéticos.

El Plan de Emergencia Provincial (Decreto N° 1.805/00) establece las medidas que están a cargo de los organismos gubernamentales antes, durante y después de concluido un siniestro declarado como emergencia y considera la necesidad de ser complementado entre otros con los planes de autoprotección de empresas industriales y comerciales.

8.2.7.7 Ley Nacional N° 19.587, de Higiene y Seguridad en el Trabajo y el Reglamento Complementario, Decreto N° 351/1979 y sus modificatorias

Ley Nacional N° 19.587: Boletín Oficial 28 Abril de 1972.

Decreto Nacional N° 351/1979: Boletín Oficial 22 de Mayo de 1979.

Decreto Nacional N° 911/1996: Boletín Oficial 14 de Agosto de 1996.

El objeto final de esta normativa es regular las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, cualquiera sea el lugar donde éste se preste o donde éste se desarrolle.

En lo particular tiene por objeto:

- Proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores.
- Prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o puestos de trabajo.
- Estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral.

Para efectos del desarrollo de los objetivos generales antes mencionados, son materia de esta regulación los siguientes aspectos:

- Prestaciones de medicina y de higiene y seguridad en el trabajo;
- Características constructivas de los establecimientos, incluida la provisión de agua potable y desagües industriales;
- Condiciones de higiene en los ambientes laborales, entre lo que se considera carga térmica, contaminación ambiental (estándares de calidad que rigen el ambiente laboral); radiaciones, ventilación; iluminación y color; ruidos y vibraciones;
- Condiciones de seguridad del establecimiento industrial, entre las que destacan instalaciones eléctricas, máquinas y herramientas, aparatos que puedan desarrollar presión interna, trabajos con riesgos especiales; protección contra incendios;
- Protección personal del trabajador;
- Capacitación del personal.

Las infracciones a la presente ley y sus reglamentos serán sancionadas por la autoridad nacional o provincial que corresponda, según la Ley N° 18.608, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 18.694.

El Decreto Nacional N° 911/96 y sus normas complementarias establecen reglas específicas sobre seguridad e higiene para la industria de la construcción, excluyendo para la misma la aplicación del Decreto Reglamentario General N° 351/79 .

8.2.8 Legislación Ambiental Relacionada al Manejo de Residuos

8.2.8.1 Ley Nacional N° 25.612, sobre Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de Servicios y Decreto Nacional N° 1.343/2002, de Promulgación Parcial de la Ley

Ley Nacional N° 25.612: Boletín Oficial 27 de Julio del 2002.

Decreto Nacional N° 1.343/2002: Boletín Oficial 29 de Julio del 2002.

La presente ley, establece un régimen integral para el manejo de los residuos generados por la actividad industrial y de servicios en todo el territorio nacional.

Fue dictada conforme a las atribuciones que el Artículo 41° de la Constitución Nacional otorga al Poder Legislativo, es decir, tiene el carácter de presupuesto mínimo para el desarrollo de las legislaciones provinciales.

Considerando el carácter general de la misma, el legislador ha dispuesto que su reglamentación se lleve a cabo dentro de 120 días corridos a contarse desde su promulgación, lo que hasta el momento no se ha producido. Mientras esta reglamentación no se dicte, se mantendrán vigentes los registros y anexos que contempla la Ley Nacional N° 24.051 de Residuos Peligrosos. Lo mismo ocurre en relación con la gestión de los residuos patológicos. Posteriormente, cada provincia deberá reglamentar la aplicación local de la misma, para implementar y desarrollar las instituciones dispuestas por ley.

El marco general de la ley señala que ésta tiene por objeto establecer los “presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la gestión integral de residuos de origen industrial y de actividades de servicio, que sean generados en todo el territorio nacional, y sean derivados de procesos industriales o de actividades de servicios”.

Se entiende por proceso industrial, toda actividad, procedimiento, desarrollo u operación de conservación, reparación o transformación en su forma, esencia, calidad o cantidad de una materia prima o material para la obtención de un producto final mediante la utilización de métodos industriales.

Conforme a la definición precedente, los residuos generados como parte de las actividades extractivas de una faena minera estarían exentos de esta regulación, no

obstante, todo residuo generado como consecuencia de la actividad de beneficio y/o procesamiento del mineral quedaría comprendido dentro del concepto de residuo industrial. Este concepto, en virtud del Artículo 2° es ampliado a toda descarga o derrame accidental o derivado de una emergencia o contingencia. En efecto, el texto dice *“se entiende por residuo industrial a cualquier elemento, sustancia y objeto en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso, obtenido como resultado de un proceso industrial, por la realización de una actividad de servicio o por estar relacionado directa o indirectamente con la actividad, incluyendo eventuales emergencias o accidentes, del cual su poseedor productor o generador no pueda utilizarlo, se desprenda o tenga la obligación legal de hacerlo”*.

La ley comprende el manejo de los residuos desde la generación de los mismos hasta la disposición final de éstos y es comprensiva de todos los residuos generados por una actividad industrial y de servicios, independientemente del estado físico en el cual se generen, no obstante quedan expresamente excluidos de este régimen los residuos biopatogénicos, residuos domiciliarios, residuos radiactivos y los residuos derivados de las operaciones normales de buques y aeronaves.

El objetivo de la ley es el manejo integral de los residuos. En virtud de lo anterior, establece una política de gestión integral obligando al generador, en primer término, a adoptar medidas de minimización y, en el evento que esto no sea factible lo obliga a gestionar los residuos en base a criterios de tolerancia entre residuos (lo que fuerza la segregación de los mismos cuando ello sea requerido dadas las características de peligrosidad de los residuos); identificación de envases y residuos; tratamiento y disposición final con preferencia in situ (sólo en el evento que ello no sea factible podrá hacerlo a través del servicio prestado por terceros) al establecimiento de un sistema de registro y a mantener permanentemente informada a la autoridad a través de una declaración jurada que contenga los datos identificatorios y las características de los residuos industriales, como así también los procesos que los generan.

Respecto al transporte de residuos, éste requiere el registro de la actividad y el manifiesto de los residuos a transportar. El transportista se hace responsable, en su calidad de guardián, de los residuos objeto del transporte mientras éste dure y sólo podrá entregar el transporte en el punto manifestado por el generador. La actividad de transporte requiere seguros ambientales por accidentes con el objeto de recomponer los posibles daños ambientales que su actividad genere.

Respecto al tratamiento y disposición final de los residuos, la ley establece que las condiciones técnicas mínimas que deberán satisfacer estas instalaciones estarán sujetas a la reglamentación que se dicte al efecto. Para ello distingue plantas de tratamiento y plantas de disposición final. Como regla general no se aceptarán depósitos transitorios.

Así también establece que toda planta de almacenamiento, tratamiento o disposición final de residuos, previo a su habilitación, deberá realizar un Estudio de Impacto Ambiental, el cual será presentado ante la autoridad competente, la que emitirá una Declaración de Impacto Ambiental.

Finalmente, señala que estas instalaciones deberán llevar un registro de sus operaciones y que esta información se integrará al Sistema de Información Integrado (este es un instrumento de gestión ambiental que contempla la Ley General de Medio Ambiente).

La autoridad de aplicación es aquella que le corresponde al área con competencia ambiental que determine el Poder Ejecutivo.

Cabe consignar que teniendo en cuenta la característica constitucional de “Ley de Presupuestos Mínimos”, la norma analizada, la misma no requiere adhesión para su aplicación en el territorio de la Provincia de San Juan, pero atendida la falta de reglamentación o de ley provincial complementaria, se consideró que sólo serán aplicables aquellos Artículos que resulten operativos por sí mismos.

8.2.8.2 Ley Nacional N° 25.919, sobre Gestión de Residuos Domiciliarios y Decreto Nacional N° 1.158/2004, de Promulgación Parcial de la Ley

Ley Nacional N° 25.919: Boletín Oficial 7 de Septiembre del 2004.

Decreto Nacional N° 1.343/2002: Boletín Oficial 7 de Septiembre del 2004.

Esta ley establece los presupuestos mínimos para la gestión integral de residuos domiciliarios, en el marco del mandato constitucional establecido en el Artículo 41° de la Constitución Nacional. De lo cual se desprende que deberá adecuarse a estos

presupuestos mínimos toda la legislación existente en materia de residuos domiciliarios ya existentes a nivel nacional, provincial y/o municipal.

La Ley N° 25.916 define a los residuos domiciliarios como elementos, objetos o sustancias que los humanos desechan o abandonan y no están regulados por normas específicas, pero circunscribe su mandato a los de origen residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o institucional que son la mayor parte de los orígenes posibles.

Son objetivos de la misma:

- a) Lograr un adecuado y racional manejo de los residuos domiciliarios mediante su gestión integral, a fin de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población;
- b) Promover la valorización de los residuos domiciliarios, a través de la implementación de métodos y procesos adecuados;
- c) Minimizar los impactos negativos que estos residuos puedan producir sobre el ambiente;
- d) Lograr la minimización de los residuos con destino a disposición final.

Esta norma prevé la gestión de los residuos domiciliarios abarcando todo el proceso comprendido entre la generación y su disposición final, pasando por la disposición inicial, general o selectiva, la recolección, transferencia y transporte y su procesamiento o tratamiento.

La ley establece una clara política ambiental en relación con los lugares destinados a la disposición permanente de los residuos domiciliarios, denominados “centros de disposición final”. A tal fin establece que estos lugares deberán contar con un Evaluación de Impacto Ambiental, que contemple la ejecución de un Plan de Monitoreo de las principales variables ambientales durante las fases de operación, clausura y postclausura. Así mismo, dispone que deben ubicarse en sitios suficientemente alejados de áreas urbanas, de manera tal de no afectar la calidad de vida de la población. Su emplazamiento debe determinarse considerando la planificación territorial, el uso del suelo y la expansión urbana durante un lapso que incluya el período de postclausura. De la misma manera, está vedada su ubicación dentro de áreas protegidas o sitios que contengan elementos significativos del patrimonio natural y cultural o en lugares inundables.

Establece que las autoridades de aplicación de la presente ley son aquellas correspondientes a cada una de las jurisdicciones locales.

A nivel nacional, establece un sistema de coordinación interjurisdiccional, cuyo coordinador es el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), el cual tiene a su cargo lograr los objetivos de la ley en todo el territorio nacional.

8.2.8.3 Ley Nacional N° 23.992, Ratificación del Convenio de Basilea

Publicación en el Boletín Oficial: 28 de Octubre de 1991.

Mediante esta ley, el Congreso Nacional ratifica la firma del Convenio de Basilea por parte del Poder Ejecutivo Nacional.

Este convenio regula el movimiento transfronterizo de los desechos peligrosos y su eliminación. El objetivo del Convenio es limitar el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos, por ello la prohibición establecida para este movimiento no es absoluta sino parcial al establecer los procedimientos a través de los cuales los países podrán realizar la exportación e importación de un país a otro.

Cabe recordar que la Constitución Nacional prohíbe el ingreso de residuos peligrosos al territorio nacional.

8.2.8.4 Ley Nacional N° 25.670, Presupuestos Mínimos Para La Gestión y Eliminación de los P.C.B.

Publicación en el Boletín Oficial: 19 de Noviembre del 2002.

Mediante esta ley se establecen los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los bifenilos Policlorados (PCBs), en todo el territorio de la Nación conforme lo ha establecido el Artículo 41 de la Constitución Nacional.

Sus objetivos son fiscalizar las operaciones asociadas a los PCBs, procurar la descontaminación o eliminación de aparatos que lo contengan, eliminar los PCBs usados, prohibir su ingreso al país como así también su producción y comercialización.

La autoridad de aplicación, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, tiene a su cargo la adopción de todas las medidas necesarias para efectos de cumplir con los objetivos de esta ley, como así también el Registro Nacional Integrado de Poseedores de PCBs, creado por esta norma.

La ley ha establecido como presunciones, salvo prueba en contrario, que el PCBs usado es un elemento riesgoso en los términos del Artículo 113° del Código Civil y que el daño causado por los mismos es equivalente al causado por un residuo peligroso. También se establece que los PCBs continúan alcanzados por la normativa específica de residuos peligrosos.

Se entiende por PCBs a los: policloroterfenilos (PCT), el monometiltetraclorodifenilmetano, el monometildiclorodifenilmetano, el monometildibromodifenilmetano, y a cualquier mezcla cuyo contenido total de cualquiera de las sustancias anteriormente mencionadas sea superior al 0,005% en peso (50 ppm).

8.2.8.5 Ley Nacional N° 24.051, sobre Residuos Peligrosos y Decreto Reglamentario Nacional N° 831/1993. Ley Provincial de Adhesión N° 6.665

Ley Nacional N° 24.051: Boletín Oficial 17 de Diciembre de 1991.

Decreto Reglamentario Nacional N° 831/1993: Boletín Oficial 3 de Mayo de 1993.

Ley Provincial N° 6.665: Boletín Oficial 11 de Enero de 1996.

La Ley N° 24.051 de Residuos Peligrosos se encuentra vigente desde Enero de 1992. Contiene normas de tutela ambiental en lo relativo a los residuos peligrosos. Toda su normativa está referida a la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de los llamados “residuos peligrosos”.

A fin de precisar el ámbito de aplicación de esta norma podemos considerar que la misma resulta aplicable a:

- Residuos generados o ubicados en lugares de jurisdicción nacional.
- Residuos ubicados en territorio de una provincia pero destinados al transporte fuera de ella (transporte interprovincial).

- Residuos ubicados en territorio de una provincia pero que salgan de él por cualquier medio, aún accidental, como podría ser la acción del viento u otro fenómeno de la naturaleza.
- Residuos ubicados en territorio de una provincia, que pudieran afectar a criterio de la autoridad de aplicación, a las personas o el ambiente más allá de la jurisdicción local en la cual se hubieren generado.
- Cuando la autoridad de aplicación disponga medidas de higiene y/o seguridad cuya repercusión económica aconseje uniformarlas en todo el territorio nacional, a fin de garantizar su efectivo cumplimiento.

Según el Artículo 2° de la ley *“será considerado residuo peligroso, a los efectos de esta ley, todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.”*

En particular serán considerados peligrosos los residuos indicados en el Anexo I o que posean alguna de las características enumeradas en el Anexo II.

Las disposiciones de la presente ley serán también de aplicación a aquellos residuos peligrosos que pudieren constituirse en insumos para otros procesos industriales.

Quedan excluidos de los alcances de esta ley los residuos domiciliarios, los radioactivos y los derivados de las operaciones normales de los buques, los que se registrarán por leyes especiales y convenios internacionales vigentes en la materia.

Según el Artículo 3° de la ley *“Prohíbese la importación, introducción y transporte de todo tipo de residuos provenientes de otros países al territorio nacional y sus espacios aéreos y marítimo”*. Conforme a lo establecido en el Artículo 3° del Reglamento N° 831 de 1993, Reglamentación de la Ley N° 24.051, quedan comprendidos en esta prohibición aquellos productos procedentes de reciclados o recuperación material de residuos que no sean acompañados de un certificado de inocuidad sanitaria y/o ambiental, según el caso, expedido previo al embarque por la autoridad competente del país de origen y ratificado por la Autoridad de Aplicación, previo al desembarco. Cuando existieren dudas de la Administración Nacional de Aduanas acerca de la categorización o caracterización de un residuo, serán giradas las actuaciones a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, a los efectos de que ésta se

expida mediante acto expreso en un plazo no superior a diez (10) días hábiles contados desde su recepción.

Esta ley prevé la apertura de registros de generadores y operadores de residuos peligrosos, en ellos deberán inscribirse las personas físicas o jurídicas responsables de la generación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.

La Provincia de San Juan se encuentra adherida a esta norma y por lo tanto la misma resulta aplicable en todo el territorio provincial, no así su decreto reglamentario el cual resultará aplicable conforme el ámbito descrito supra.

En virtud de la Ley Provincial de adhesión N° 6.665, la autoridad de aplicación en la Provincia de San Juan en materia de residuos peligrosos es la Dirección de Política Ambiental o la autoridad que ostente la mayor jerarquía provincial en relación al ambiente. Además, pone en ejecución el Registro Provincial de Generadores y Operadores de Sustancias. En este registro se inscribirán las personas responsables de la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos en la Provincia de San Juan. Finalmente, prohíbe la importación, introducción y transporte de todo tipo de residuos peligrosos al territorio provincial.

8.2.8.6 Ley Provincial N° 7.375, modificada por Ley Provincial N° 7.396, sobre Residuos Sólidos y Urbanos, Vertederos Controlados

Ley Provincial N° 7.375: Boletín Oficial 15 de Julio de 2003.

Ley Provincial N° 7.396: Boletín Oficial el 29/07/03.

La presente ley tiene por finalidad promover la recolección y tratamiento de residuos sólidos urbanos, con la finalidad de evitar la contaminación, propiciar la protección del entorno ambiental físico y social y garantizar condiciones mínimas igualitarias ambientales a todos los habitantes del territorio de la Provincia de San Juan, determinando las responsabilidades jurisdiccionales del gobierno provincial y de los municipios de la Provincia. Además establece normas de aplicación para la autorización de vertederos controlados o rellenos sanitarios y prevé sanciones para el caso de incumplimientos a esta norma.

El legislador expresamente ha determinado que esta ley será de orden público y que el Estado Provincial promoverá la coordinación y la interrelación de acciones con los Municipios de la Provincia de San Juan.

En el ámbito de aplicación de esta ley, quedan comprendidos los residuos sólidos en:

- Domiciliarios.
- Comerciales, institucionales y de servicios.
- Sanitarios no patogénicos.
- Limpieza de calles y espacios verdes.
- Abandono de animales muertos, muebles, enseres, vehículos.
- Industriales y agrícolas.
- De construcción, obras menores y reparación domiciliaria.
- Los residuos, asimilable a urbanos cuya recolección, transporte, almacenamiento y eliminación sea de competencia municipal.

Para los fines de su interpretación es importante considerar que lo establecido en esta ley es complementario a las disposiciones de carácter especial referentes a residuos radioactivos, aguas residuales, productos tóxicos contaminantes o peligrosos o cualquier otra clase de excretas que se rijan por disposiciones especiales.

La ley establece que el almacenamiento, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos será responsabilidad conjunta del Gobierno Provincial y de los municipios según lo establecido por la Constitución Provincial, el Código Sanitario Provincial, las Cartas Orgánicas Municipales, la Ley Orgánica Municipal y sus modificaciones y la legislación vigente complementaria.

Además dispone que los generadores o poseedores de residuos, podrán conservarlos adecuadamente o constituir, individual o colectivamente, sus propios depósitos o vertederos, así como proceder a su tratamiento, previa obtención de la autorización municipal, de acuerdo con lo establecido en la presente ley y lo que disponga la Dirección de Política Ambiental u organismo gubernamental que la reemplace. Para el caso específico de los proyectos mineros se deberá considerar la competencia en la materia del Departamento de Minería.

En cuanto a los vertederos controlados o rellenos sanitarios establece que los proyectos para el emplazamiento y construcción deberán realizarse en el lugar apropiado, de acuerdo a las exigencias del Municipio con jurisdicción donde se halle ubicado, debiendo cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Provincial N° 6.571 de Evaluación de Impacto Ambiental, modificada por Ley Provincial N° 6.800.

Además califica a la actividad de los vertederos como actividad molesta, insalubre, nociva o peligrosa y establece que las autorizaciones necesarias para su emplazamiento se tramitarán de acuerdo con lo previsto en las normas que regulan dichas actividades, con lo establecido en la presente Ley y normas complementarias.

Cabe destacar que la propia norma dispone que cuando las características del proyecto merezcan especial atención ante la posible contaminación de recursos del subsuelo, las autoridades de aplicación, solicitarán informe del área competente, se estima que la misma podrá ser el Departamento de Hidráulica.

Si la naturaleza o ubicación del vertedero, estuviera relacionada o pudiera afectar la competencia de otros organismos, la autoridad competente podrá recabar informes de éstos y solicitará la correspondiente declaración de impacto ambiental que contempla la Ley Provincial N° 6.571, modificada por la Ley Provincial N° 6.800.

8.2.8.7 Ordenanza Municipal N° 833, Aprobada por Acta N° 915 del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Iglesia

Publicación en el Boletín Oficial: 28 de Abril 2000.

Conforme a la presente ordenanza todos los establecimientos industriales que generen residuos se encuentran obligados a tratar y disponer sus residuos en los establecimientos que con este fin serán habilitados por la Municipalidad de Iglesia.

Con la finalidad de establecer el control adecuado en el manejo de los residuos, cualquiera sea el carácter o naturaleza de éstos, deberá inscribirse en el registro de generadores, transportistas u operadores que para tal fin dispondrá el Municipio.

La autoridad de aplicación de esta Ordenanza es el Municipio de Iglesia. Nótese que a la fecha el Municipio de Iglesia o la Autoridad Ambiental Provincial no ha habilitado

establecimientos para el tratamiento de residuos, dentro del ejido del Municipio de Iglesia.

8.2.9 Legislación Relacionada al Manejo de Contingencias

8.2.9.1 Ley Provincial N° 6.837, y modificatoria Ley Provincial N° 6904.

Decreto Reglamentario N° 1476-MG-2000, sobre Régimen de Defensa Civil en coincidencia con lo establecido en la Ley Nacional N° 24.059 y normas reglamentarias de Seguridad Interior

Ley Provincial N° 6.837: Boletín Oficial el 09 de Enero de 1998.

Ley Provincial N° 6.904: Boletín Oficial 4 de Enero de 1999.

Decreto Reglamentario N° 1.476-MG-2000: Boletín Oficial 2 de Octubre de 2000.

La presente ley tiene por objeto atender a las necesidades generadas por estados de emergencia producidos por fenómenos naturales o de la acción de personas, que se canalizarán a través de Defensa Civil.

La misma ley entiende por Defensa Civil al conjunto de medidas y actividades no agresivas tendientes a evitar, anular o disminuir los efectos que los agentes de la naturaleza o cualquier desastre de otro origen, puedan provocar sobre la población y sus bienes y a contribuir a restablecer el ritmo normal de vida de la zona afectada.

La Defensa Civil comprende dos etapas:

- (i) un período de planificación y coordinación tendiente a prever las contingencias y necesidades emergentes de un desastre y;
- (ii) un período de ejecución con el propósito de mitigar los efectos negativos de un fenómeno a partir de su existencia.

La Defensa Civil se desarrollará en todo el territorio de la Provincia de acuerdo con lo que establezca la presente ley y, en lo que sea compatible, por las normas que sobre la materia rijan en la Nación, por lo que se considera aplicable lo previsto en la Ley Nacional N° 24.059 de Seguridad Interior.

Son objetivos de la norma los siguientes:

- Definir las responsabilidades y funciones del Gobernador de la Provincia, los ministros y titulares de entes autárquicos o descentralizados, Intendentes

Municipales, habitantes en general y la colaboración de otras entidades como asociaciones y entidades de asistencia y entidades privadas en general, en donde se entiende incluida una compañía minera. Estas deberán colaborar en la forma y medida que les sean requeridas por las autoridades de Defensa Civil de su jurisdicción; serán responsables del cumplimiento de las disposiciones que se dicten en tal sentido.

- Integrar los esfuerzos públicos y privados para la adecuada prevención y atención de la emergencia.
- Garantizar el manejo oportuno y eficiente de todos los recursos humanos, técnicos, administrativos y económicos que sean indispensables para la prevención y atención de la emergencia o de la situación de desastre.

La norma prohíbe expresamente, en todo el territorio de la Provincia, la creación de organismos o entidades que se arroguen las funciones y tareas que establece la presente ley, así como las que tengan por finalidad desarrollar actividades que impliquen una suplantación o superposición de la misión que compete a las autoridades de Defensa Civil.

Dispone que el Gobernador de la Provincia tendrá a su cargo la planificación, organización, promoción, coordinación, control y dirección de la Defensa Civil y, eventualmente, la conducción de las operaciones de emergencia dentro del ámbito provincial, pudiendo eventualmente delegar esta función.

Si bien la ley expresamente no lo contempla, se considera que de producirse un evento de naturaleza tal que pueda llegar a provocar daños o posibles estados de emergencia que afecten a la población y sus bienes, por razón de agentes de la naturaleza o cualquier desastre de otro origen puedan llegar a provocar daños o posibles estados de emergencia que afecten a la población y sus bienes, se deberá notificar por escrito dicho acontecimiento a la oficina de Defensa Civil y al Intendente Municipal, del lugar donde se hubiera producido el evento, a fin de poner en funcionamiento el esquema previsto en la norma, prestando en este caso toda la colaboración necesaria para restablecer el ritmo normal de vida de la zona afectada.

8.2.9.2 Ley Provincial N° 7.055. Aprobación del Convenio Marco de Asistencia y Cooperación Recíproca entre El Gobierno de la Provincia de San Juan y Gendarmería Nacional - Agrupación X San Juan

Publicación en el Boletín Oficial: 6 de Septiembre del 2000.

Por medio de esta ley se aprueba el Convenio Marco de Asistencia y Cooperación Recíproca firmado entre Gendarmería Nacional - Agrupación X San Juan, y el Gobierno de la Provincia de San Juan, el cual fuera aprobado previamente por Decreto N° 874/2000.

Este convenio tiene por objeto coordinar esfuerzos entre las partes en materia de:

- Control de tránsito, tendiente a disminuir los índices de lesiones, muerte o incapacidades, y los perjuicios económicos y sociales que se generen para la comunidad;
- Apoyo a la actividad minera, utilizando todos los medios necesarios para la ejecución e instrumentación de planes y programas conjuntos destinados a la asistencia y apoyo a la actividad minera y otros puntos vinculados a ella, primordialmente en lo que respecta a casos de catástrofes naturales u otros fenómenos naturales, la protección del medio ambiente, la seguridad, poder de policía, conservación del patrimonio natural y cultural frente a actividad minera.
- Lograr una efectiva interacción en la protección de los recursos arqueopaleontológicos,
- Lucha contra los delitos ecológicos;
- Acciones concomitantes de Sanidad Vegetal tendiente al control y erradicación de la mosca de los frutos.
- Promover la colaboración mutua y la coordinación de acciones de Defensa Civil.

Con el objetivo de implementar acciones conjuntas en relación a los objetivos enunciados ambas partes se obligan a disponer de los medios y recursos humanos que les son propios, dentro de sus posibilidades.

Se establece que el convenio tiene vigencia mientras cualquiera de las partes no manifieste su voluntad en contrario, lo que deberá ser comunicado de manera

fehaciente a la otra, con una antelación mínima de sesenta días hábiles. Además se dispone que las acciones a implementar se determinen por actas complementarias.

8.3 CRITERIOS O ESTÁNDARES TÉCNICOS APLICABLES AL PROYECTO

8.3.1 Calidad del Aire y Emisiones

En cuanto a las recomendaciones operativas, el Banco Mundial aconseja que los proyectos mineros incorporen sistemas de control de polvo e incorporen medidas tales como:

- Sistemas de control de polvo en equipos de trituración;
- Minimización de la distancia de caída en transferencia de materiales mediante el uso de correas transportadoras de altura ajustables, etc.;
- Humectación de áreas de trabajo, camino y pilas de almacenamiento;
- Instalación de cobertores en equipo.

Los estándares de calidad del aire vigente en la Argentina para la actividad minera están establecidos en el Anexo IV de las Normas Complementarias de la Ley N° 24.585, los cuales se adjuntan en la Tabla TO8.1.

A ésta se han incorporado además, a modo de referencia estándares internacionales (OMS, US EPA), los que serán utilizados por el proyecto como mecanismos de alerta para aquellos contaminantes que tienen una norma internacional más estricta y como parámetro para aquellos contaminantes que no están regulados por Argentina.

Tabla TO8.2 contiene los estándares de calidad ambiental para algunos contaminantes peligrosos que pueden ser relevantes en la faena minera Pascua-Lama, conforme a lo definido por el Decreto N° 831, Reglamento de la Ley sobre Residuos Peligrosos.

Tabla TO8.3 contiene los estándares de emisión de contaminantes gaseosos que puede generar el proyecto durante el proceso de producción de metal doré. Estos estándares han sido definidos por el Decreto N° 831, Reglamento de la Ley sobre Residuos Peligrosos.

Para conservar la calidad del aire y evaluar el impacto que un proyecto genera en éste, el Banco Mundial recomienda evaluar el impacto esperado en la concentración de material particulado respirable (MP10) en el aire. El valor guía de concentración recomendado por el Banco Mundial es 70 µg/m³N en 24 horas y 50 µg/m³N como promedio anual. Los

valores guía recomendados deben cumplirse en el límite externo inmediato de la propiedad donde se emplaza el proyecto.

8.3.2 Recursos Hídricos

Los estándares de calidad del agua y de efluentes, vigente en la Argentina para la actividad minera están establecidos en el Anexo IV de las Normas Complementarias de la Ley N° 24.585 y se presentan en la Tabla TO8.4. Esta norma establece los estándares distinguiendo los distintos usos que el recurso puede tener. Adicionalmente, en la Tabla TO3.8 de la Sección 3 de este documento se ha incorporado un resumen de los valores Guía de Agua Potable establecidos por el Código Alimentario y los de la Organización Mundial de la Salud del año 2004.

Adicionalmente, hemos incorporado como referencia, en la Tabla TO8.5, las normas de calidad para descargas de efluentes industriales contenidas en el Decreto Provincial N° 638/89 modificado por el Decreto Provincial N° 841/03.

Por su parte, el Banco Mundial recomienda un conjunto de medidas que debiera implementar un proyecto durante su operación, restauración y cierre. Dichas medidas, que deben incluirse en los IIA, son, entre otras, las siguientes:

- Reducir la generación de Drenaje Ácido de la Roca (DAR).
- Desviar y manejar adecuadamente los lixiviados de depósitos de estériles para evitar el contacto y contaminación de masas de aguas superficiales y subterráneas.
- Minimizar el consumo de agua fresca, recirculando las aguas residuales de proceso para minimizar la descarga de contaminantes lo máximo posible.
- Desviar las aguas de escorrentías superficiales, mediante canales de desvío.
- Tratar las aguas residuales industriales y el DAM mediante tratamientos físico – químico.

8.3.3 Calidad del Suelo

Conforme a lo establecido en el Anexo IV de las Normas Complementarias de la Ley N° 24.585, en la Tabla TO8.6 se identifican los estándares de calidad de suelo según su uso.

8.3.4 Hábitat, Flora y Fauna

Como regla general, el Banco Mundial no acepta que los hábitats naturales sean afectados significativamente por un proyecto. Las excepciones a esta regla general son:

- Que no haya alternativas factibles.
- Que la evaluación ambiental demuestre que los beneficios son substancialmente más relevantes que los costos.
- Que el proyecto contemple medidas de compensación, las que debieran incluir el apoyo a una o más áreas protegidas, ecológicamente similares a los hábitats naturales afectados adversamente por el proyecto y ninguna más pequeña que la afectada.

La regla general se torna absoluta cuando el impacto implica la conversión o degradación de hábitats naturales críticos. Esto incluye áreas protegidas y áreas o recursos asociados o relacionados (tales como fuentes de agua), de las cuales depende el área protegida.

8.3.5 Recursos Patrimoniales

La recomendación del Banco Mundial es la conservación y preservación de los recursos con valor patrimonial.

8.3.6 Ruido

Argentina no cuenta con normativa específica sobre la materia, y en consideración de que el ruido sobre comunidades estará relacionado al tránsito de vehículos a través de vías públicas, para la evaluación del impacto por la generación de ruido se han adoptado los criterios que establece el Departamento de Vialidad de los Estados Unidos (USDOT). Estos criterios, que se relacionan con el incremento del Nivel de Presión Sonoro (NPS), se resumen en la Tabla TO8.7

El uso de estas guías ha permitido valorar los efectos del Proyecto, en términos del nivel o grado de significancia del ruido generado.

8.3.7 Manejo de Sustancias Peligrosas

Como parte del proceso productivo, el Proyecto Pascua-Lama producirá mercurio. Considerando que este producto será exportado por vía marítima, el titular del proyecto ha definido que el manejo, embalaje y transporte se seguirá por las buenas prácticas definidas en el Código para el Transporte Marítimo Internacional de Sustancias Peligrosas (IMDG¹⁰) de la Organización Internacional Marítima, el cual resulta aplicable en la República Argentina conforme Artículo 6° del Anexo S del Decreto Nacional

¹⁰ Según sus siglas en Inglés

Reglamentario de la Ley Nacional N° 24.449, identificado bajo el N° 779/1995.

De acuerdo a las características del mercurio producido, éste es representado con el número UN N° 2.809, el que conforme a la sección 3.0 del citado código corresponde a una sustancia corrosiva Clase 8. Las instrucciones de manejo y transporte, especifican las condiciones de seguridad que se adoptarán. Estas instrucciones establecen que el transporte deberá ser realizado en botellas de acero que no superen los 2,5 litros, las que deberán disponer de un sello que evite su abertura y derrame de la sustancia. No obstante ello, el Código IMDG incluye una excepción en el procedimiento por la cual en el transporte vía marítima se puede obtener una aprobación, por la autoridad competente, para utilizar contenedores de dimensiones alternativas a los indicados específicamente en el Código. En este caso, los contenedores deben satisfacer las previsiones generales del Código y proporcionar al menos el mismo nivel de seguridad como si la sustancia estuviera embalada en concordancia con el método específico del Código.

8.3.8 Residuos Sólidos

El Banco Mundial, respecto de los residuos sólidos al interior de una faena minera o de cualquier establecimiento industrial, recomienda que el titular del proyecto sea responsable de su manejo desde el origen de los mismos hasta su disposición final. Lo anterior no importa la responsabilidad directa sobre cada una de las acciones que comprende el manejo de los residuos, sino que la responsabilidad en el sentido que éstas se lleven a cabo en forma técnicamente adecuada y ajustadas a las normas nacionales vigentes.

Respecto de los residuos mineros, se recomienda desviar y manejar adecuadamente los lixiviados de depósitos de estériles para evitar el contacto y contaminación de masas de aguas superficiales (incluidas las escorrentías) y subterráneas.

En lo que respecta a los residuos no peligrosos orgánicos, estos serán incinerados. El horno incinerador cumplirá con las leyes nacionales y provinciales con respecto al manejo de residuos sólidos y estándares internacionales en lo que se refiere a emisiones atmosféricas, específicamente con los estándares de la EPA¹¹. Dichos estándares de emisión fueron adoptados a nivel nacional por la Resolución N° 708/96 de la Secretaría de

¹¹ EPA Standards of Performance for New Stationary Sources and Emission Guidelines for Existing Sources: Commercial and Industrial Solid Waste Incineration Units. 40 CFR Part 60.

Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Nación. Estos estándares regulan las normas de medición de concentración de gases y material particulado emitidos por chimeneas de conformidad a lo establecido por la Ley N° 24.051, a la cual la Provincia de San Juan se encuentra adherida por Ley Provincial N° 6.665 y su Decreto Nacional Reglamentario N° 831/93, normas tratadas en este capítulo. No obstante que la Provincia de San Juan no se encuentra adherida al decreto nacional referido y a la resolución indicada, se ha optado a su consideración frente a la inexistencia de norma provincial de iguales características.

Cabe destacar con relación a los criterios o estándares técnicos aplicables al proyecto, que específicamente para la actividad minera provincial, corresponde considerar los estándares de emisiones de la EPA de acuerdo a lo indicado en el Decreto Provincial N° 1426/96 artículo 15 y 16 inciso a, norma tratada en este capítulo.